



DISCUSIÓN DE ALGUNOS
DE LOS ASUNTOS
SOBRESALIENTES DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL
E INTERNACIONAL
QUE SON PLANTEADOS
POR LA RELACIÓN
ESTADOS UNIDOS-PUERTO RICO

Conferencia por el
Juez Juan R. Torruella,
Tribunal de Apelaciones
de Estados Unidos
Para el Primer Circuito

DISCUSIÓN DE ALGUNOS DE LOS ASUNTOS
SOBRESALIENTES DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL
QUE SON PLANTEADOS POR LA RELACIÓN
ESTADOS UNIDOS-PUERTO RICO

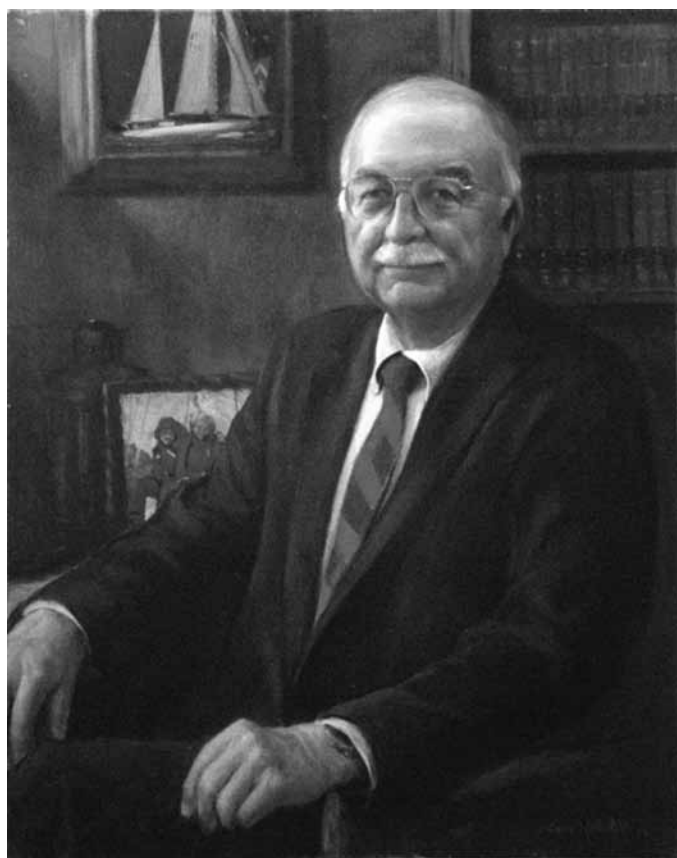
Conferencia en el
John Jay College of Criminal Justice
14 de abril de 2016

Juan R. Torruella,
Juez, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos
Para el Primer Circuito

El autor reconoce la ayuda de
Rebecca Buckwalter-Poza

Por supuesto, soy el único responsable
del contenido y las opiniones expresadas aquí.

Traducción de
Wallice J. de la Vega



Sobre el Autor

Juan Rafael Torruella del Valle

Vicepresidente y Académico de Número fundador de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación

Educación

Universidad de Oxford, M. St. 2003

Roger Williams University, L.L.D. (Honoris Causa) 1998

St. John's University, L.L.D. (Honoris Causa) 1995

Universidad de Puerto Rico, M.P.A. 1984

Universidad de Virginia, LL.M. 1984

Universidad de Boston, J.D. 1957

Universidad de Pensilvania, B.S. 1954

Carrera Profesional

Presidente Tribunal de Arbitraje Deportivo Juegos Olímpicos, Londres, Reino Unido, julio a agosto de 2012

Presidente Tribunal de Arbitraje Deportivo Olimpiadas de Invierno, Vancouver, Canada, febrero de 2010

Juez Presidente Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, agosto de 1994 hasta el 15 de junio de 2001

Juez del Tribunal Federal Apelativo para el Primer Circuito 1984-hasta el presente

Juez Presidente Corte de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico, 1982-1984

Juez del Tribunal de Distrito para Puerto Rico 1974-1984

Abogado Práctica privada, 1959-1974

Abogado Junta Nacional de Relaciones Laborales, 1957-1959

Fuente: Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación

Notas del traductor

Reconociendo la importancia histórica de este documento en esta debacle que se encuentra Puerto Rico en su historia política y financiera, he aceptado la solicitud de traducirlo bajo la expectativa de que no se convierta en una pieza tratada como mercancía común con fines de lucro, sino como un texto de estudio para los interesados en conocer la trayectoria que nos ha traído, como pueblo, hasta el borde de este precipicio. De suma importancia debe ser este escrito para aquellos que gustan de opinar, argumentar y debatir sobre este tema tan profundo sin tener una base sólida para hacerlo, dependiendo únicamente de repeticiones sin fundamentos y de la información pública provista por muchos involucrados directamente en el problema financiero de Puerto Rico que, por intereses personales, tienden a “representaciones creativas” de la realidad histórica. Sin comprender el contexto histórico del problema no puede haber la claridad necesaria para remediarlo.

Es nuestra esperanza que este documento sea compartido y distribuido libremente lo más ampliamente posible.

Le agradezco al autor la oportunidad de aportar mis recursos profesionales para beneficio desinteresado de mi patria.

Notas adicionales:

1. La palabra “mainland” en este contexto se refiere a los 48 estados continentales. He usado “Estados Unidos” en su lugar reconociendo que Puerto Rico “pertenece pero no es parte” de esa nación.

2. Habiendo el autor escrito cifras usando tanto numerales como deletreadas, he optado por estandarizar el texto usando mayormente numerales del 10 en adelante, siguiendo el estilo periodístico.

3. He numerado los párrafos para facilitar búsqueda, referencias y citas del texto.

4. He asumido que la palabra “crypto-plantation” (“criptoplantación”) se usa como una comparación de plantaciones por su topografía; las cafetaleras “ocultas” (cripto) en las montañas y las azucareras plenamente visibles en las llanuras.

5. He movido al final del texto todas las notas al calce para facilitar la lectura de las páginas en este formato reducido.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JAF' or similar, written in a cursive style.

1. Presidente Travis y profesores de esta distinguida institución, compañeros presentadores, miembros del cuerpo estudiantil, invitados y otros asistentes, muy buenas tardes a todos. Comenzaré mi intervención expresando mi agradecimiento por darme la oportunidad de participar en este importante foro y discutir con ustedes algunos asuntos que creo que son de importancia fundamental para los millones de ciudadanos estadounidenses despojados que residen en Puerto Rico.

2. Tengo que confesar un poco de incomodidad al hacer mis observaciones en este momento en particular en que la incomodidad causada por el ambiente incierto en que se encuentra la relación Estados Unidos-Puerto Rico, primeramente por la razón de dos casos que están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Puerto Rico v. Sánchez Valle (2) y los casos consolidados Puerto Rico v. Confianza Franklin California Tax-Free Trust (3) y Acosta-Febo v. Franklin California Tax-Free Trust, (4) que ya han

sido expuestos y están en espera del decreto, y segundo porque el Congreso está considerando una legislación titulada “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”, a la que algún cínico con sentido del humor enfermizo le ha adherido el acrónimo “PROMESA”, conforme a la cual el gobierno de Puerto Rico será colocado prácticamente bajo sindicatura por el gobierno de Estados Unidos y el Congreso. Como punto de ese dato, el resultado de cualquiera de los casos, o el intento de aprobar la legislación propuesta - o ambos - mucho o todo de lo que comentaré hoy muy bien podría hacer académico, si no nulo.

3. Innecesario decirlo, no puedo ni entraré en especular públicamente sobre los resultados de estos casos ni sobre lo que el Congreso en su infinita sabiduría depare para Puerto Rico y sus ciudadanos, pero creo que puedo afirmar con seguridad lo obvio: Estos casos y esta legislación podría cambiar drásticamente el escenario Estados Unidos-Puerto Rico, dependiendo de cuál de varios caminos el tribunal decida tomar para resolver las cuestiones básicas que los casos plantean y qué es lo que Congreso en su momento promulgue para “ayudar” al pueblo de Puerto Rico. El producto final de los casos podría figurar en una amplia gama de resultados. Lo que el Congreso producirá tiene a todos adivinando, pero juzgando por el llamado “borrador de discusión” de

PROMESA, no parece que Puerto Rico esté a punto de ser liberado del agarre colonial de los poderes plenos que fueron autorizados por los Casos Insulares, (5), sino que de hecho, este agarre será apretado prácticamente hasta la estrangulación. He decidido proceder con mis comentarios preparados para poner ante ustedes varios asuntos que creo que pueden servirle bien como trasfondo cuando estos casos se decidan o los esfuerzos del Congreso rindan fruto.

4. Así que, sin más preámbulo, comienzo.

5. Aun según procedemos muy adentrados al siglo 21 y este país activamente promueve nuestra democracia ante el resto del mundo, desafortunadamente no siempre practicamos lo que predicamos. Esto es particularmente cierto en referencia a los derechos constitucionales y políticos de aquellos que residen en nuestras jurisdicciones externas no estatales, en zonas a las cuales nos referimos eufemísticamente como “territorios” o “posesiones”, cuando, según intentaré convencerlos a ustedes, estos son, *de facto* y *de jure*, colonias. No debe haber pregunta alguna sobre esta aseveración en cuanto a American Samoa, Guam o las Islas Vírgenes Estadounidenses, para los cuales tan recientemente como el 13 de enero de este año Estados Unidos presentó informes según requerido por el Artículo 73(e) de la Carta de las Naciones Unidas, parte de la

Declaración de la ONU Relativa a Territorios No Autónomos. (6)

6. Aunque Estados Unidos cesó en 1952 de presentar estos informes para Puerto Rico después de representaciones ante la ONU a efecto de que Puerto Rico se había convertido en una entidad con gobierno propio por razón del establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estas declaraciones en mi opinión no representaban la verdadera situación jurídica o constitucional cuando fueron hechas, ni se han hecho más verdaderas en ningún momento desde entonces hasta el presente. (7) Si tienen alguna duda, les refiero a declaraciones hechas por Estados Unidos en el escrito como amigo del tribunal presentado por el procurador general ante el Tribunal Supremo en el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, (8) en el cual Estados Unidos argumenta que la aprobación de gobierno propio para Puerto Rico en 1952 no cambió el estado fundamental constitucional de Puerto Rico como territorio estadounidense, sujeto a la autoridad suprema del Congreso bajo la Cláusula Territorial. (9)

7. Tal vez un ejemplo más desconcertante y presente del control colonial del Congreso sobre Puerto Rico yace en la propuesta legislación de PROMESA, la cual entre otras cosas, establecería una supuesta “Junta de Supervisión”, entidad no electa de siete

miembros nombrados por el presidente. (10) Esta junta tendrá el poder de imponerle al gobierno de Puerto Rico una fecha límite para desarrollar un plan fiscal y un presupuesto que satisfagan los requisitos del Congreso, así como el derecho a rechazar las propuestas de Puerto Rico y sustituirlas por las suyas en vez. (11) Puerto Rico, por supuesto, no estará representado en la junta de supervisión: Distinto a la versión anterior de la legislación, que sugería que por lo menos dos de los entonces cinco miembros de la junta ya tenían que vivir o tener un lugar primario de negocios en Puerto Rico para ser nombrados, la versión presentada en la Cámara el martes solamente requiere que un miembro “mantendrá una residencia permanente ... o tendrá un lugar primario de negocios en Puerto Rico, dejando abierta la posibilidad de llenar ese espacio con cualquiera que esté dispuesto a mudarse a Puerto Rico para satisfacer el criterio. (12) Aunque el gobernador es nominalmente parte de la junta, él es miembro ex officio sin derecho al voto. (13) La legislación también le da a la junta la prerrogativa de exigirle al gobernador de Puerto Rico toda la información y documentación que esta crea relevante (14) y requiere que la legislatura de Puerto Rico entregue inmediatamente a la junta de supervisión todas las leyes que apruebe, junto con estimados de sus costos. (15) Si la junta determina que una ley no es consistente con el plan fiscal aprobado, esta

podría unilateralmente dictar que la ley sea cambiada o simplemente desautorizar el gobierno de Puerto Rico para bloquear su ejercicio o aplicación. (16) La junta podría también requerir que el gobierno de Puerto Rico le entregue a la junta para aprobación todos los contratos y arrendamientos. (17) Y, por supuesto, Puerto Rico también tendría que obtener la aprobación de la junta antes que este “emita deuda o garantías, intercambie, modifique, recompre, liquide o entre en transacciones similares con respecto a la deuda”. (18)

8. Anidada en esta legislación hay otra cláusula que es quizás aun más perniciosa para Puerto Rico y el futuro de su gente, dado los limitados recursos agrarios y naturales de la isla. Me refiero a la Sección 5 de PROMESA, la cual abriría al desarrollo privado miles de acres de tierra protegida. (19) Hasta el secretario de Interior ha condenado esa cláusula. (20)

9. La legislación PROMESA es solo el más reciente capítulo. Hay más evidencia condenatoria en toda la historia del agarre colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Una revisión de esta evidencia y relación demuestra que las aflicciones actuales de Puerto Rico eran no solamente previsibles sino también inevitables, dados los procesos sociales, económicos y políticos a los cuales han sido sujetos Puerto Rico y sus

habitantes bajo la soberanía de Estados Unidos.

10. El punto de partida en este pésimo camino es el Tratado de París de 1898, el cual terminó la Guerra Hispanoamericana. Proveyendo la cesión de Puerto Rico de España a Estados Unidos, el tratado declaraba, en su Artículo IX, que “los derechos civiles y el estado político de los habitantes nativos ... serán determinado por el Congreso”. (21) Esta cláusula era contraria a la firme práctica y a la ley constitucional prevalente hasta entonces respecto a todas las demás adquisiciones territoriales por parte de Estados Unidos. En todos los casos anteriores, al adquirir territorio adicional, se le otorgó ciudadanía estadounidense y derechos a los habitantes de las tierras recién adquiridas, sin importar los medios usados para añadir esos territorios al dominio de la nación. (22)

11. La nueva práctica instituida después de la Guerra Hispanoamericana efectuó no solamente el distanciamiento de la práctica pasada de Estados Unidos, sino también una regresión desde cómo las cosas eran en Puerto Rico durante el dominio español, bajo el cual la isla era considerada una provincia de España (equivalente a un estado bajo la forma de gobierno estadounidense) y los puertorriqueños eran plenos ciudadanos españoles con derecho a elegir 16 delegados

y tres senadores a las Cortes de España (equivalente a nuestro congreso. (23)

12. Aunque poco después de su llegada el general Miles le había proclamado a la población puertorriqueña que Estados Unidos “promovería su prosperidad y otorgaría las inmunidades y bendiciones de la ilustración e instituciones liberales y de gobierno (estadounidenses)”, (24) Estados Unidos en vez impuso un régimen militar que abolió toda forma de representación democrática en el gobierno local. Además, a pesar de las promesas bombásticas de Miles, los poderes coloniales negociaron el Tratado de París y promulgaron el Artículo IX sin la participación, ni siquiera la consulta, puertorriqueña. El tratado y su Artículo IX fueron anunciados a los habitantes de Puerto Rico como un *fait accompli*, bajo el cual se les despojó de su ciudadanía y derechos españoles y se les requirió pronunciar lealtad a un nuevo supervisor colonial porque, según el magistrado Kennedy afirmó en el caso *Boumediene v. Bush*, “la Constitución le concede al Congreso y al presidente el poder de adquirir, disponer y gobernar territorios, no el poder de decidir dónde y cuándo sus términos aplican”. (25) Y, por supuesto, no requiere un ingeniero aeroespacial para concluir que ni el Tratado de París ni ningún otro tratado pueden sobrepasar (perdonando mi lenguaje) la Constitución otorgándole al Congreso poderes que excedan

aquellos permitidos por ese documento.

13. Desafortunadamente, sin embargo, la negociación del Tratado de París y su implementación coinciden con un periodo de euforia imperialista. Las figuras políticas predominantes en ESTADOS UNIDOS eran entusiastas exponentes del concepto del Destino Manifestado, el cual promovía el excepcionalismo estadounidense y la expectativa de que Estados Unidos, “gracias a las cualidades superiores de los anglosajones ... y a sus instituciones democráticas, inevitablemente absorbería sus vecinos”. (26)

14. Estados Unidos no estaba escribiendo en una tabla rasa. Lo que Estados Unidos podía hacer constitucionalmente con los territorios adquiridos había sido categóricamente establecido por el Tribunal Supremo en 1856. En el muy difamado (por otras razones) caso Scott v. Sanford, el magistrado presidente Roger Taney había escrito:

15. “Ciertamente, no hay poder dado en la Constitución al gobierno federal para establecer ni mantener colonias colindantes con Estados Unidos ni a distancia, a ser gobernadas según le plazca, ni agrandar sus límites territoriales de ninguna manera, excepto mediante admisión de nuevos estados ... Ningún poder es dado para adquirir un territorio a ser mantenido y gobernado en un carácter (colonial) permanente”. (27)

16. Tal vez igualmente importante, el tribunal en Sanford continuó a decretar que la Cláusula Territorial en el Artículo I de la Constitución (28) no era aplicable a los territorios adquiridos después de la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. El magistrado presidente Taney sostuvo que la Cláusula Territorial era relevante solamente para aquellas tierras sostenidas al momento del tratado con Gran Bretaña en 1783, (29), es decir, los Territorios del Viejo Oeste, (30) pero no aplicaba a tierra adquirida de allí en adelante. El tribunal además decretó en 1886, en *Yick Wo Hopkins*, que la Decimocuarta Enmienda garantizaba derechos iguales a “todas las personas dentro de la jurisdicción territorial (de Estados Unidos) sin importar diferencias de raza, color o nacionalidad”. (31) Pero en estos decretos, este precedente vital, sería pasado por alto.

17. El historiador Rubin Francis Weston contundentemente describe en su libro “*Racism in U.S. Imperialism*” qué verdaderamente pasó en la arena política de esos tiempos:

18. “Aquellos que proponían la expansión en ultramar enfrentaron este dilema : ¿qué tipo de relación tendrían los nuevos pueblos con el cuerpo político? ¿Habría de ser la relación del periodo de la reconstrucción, un intento de igualdad política para razas

distintas o habría de ser el punto de vista “contrarrevolucionario” sureño que le denegaba los derechos básicos estadounidenses a la gente de color? Las acciones del gobierno federal durante el periodo imperial y la relegación del negro al estado de ciudadano de segunda clase indican que el punto de vista sureño prevaleció. El racismo que causó la relegación del negro a un estado de inferioridad había de ser aplicado a las posesiones en ultramar de Estados Unidos “. (32)

19. El advenimiento de esta manía imperialista cargada racialmente instigó la marcada separación de la práctica pasada a la cual he aludido.

20. La transición no se dio sin disensión. El informe de 1899 de la Comisión Carroll, nombrada por el presidente McKinley para investigar las condiciones prevalentes en Puerto Rico, concluyó que no debía haber “ninguna duda al afirmar que el pueblo (de Puerto Rico) tiene buenas afirmaciones para ser considerado capaz de gobierno propio”. (33) Desafortunadamente, el gobernador de Puerto Rico retó las recomendaciones de la comisión declarando que “el pueblo (de Puerto Rico) generalmente no tiene idea de derechos políticos combinado con responsabilidades políticas”. (34)

21. Un amargo debate en el Congreso le

siguió y ese cuerpo se abanderó con el general Davis. La decisión fue grandemente influenciada por consideraciones de cómo una resolución progresiva del caso de Puerto Rico afectaría el proyecto legislativo acompañante que trataba de las Filipinas, sobre cuál senador advirtió que “debíamos tener cuidado con esos mestizos del este con aliento pestilente y un toque de lepra”. (35) Con este pernicioso ambiente como trasfondo el Congreso procedió a promulgar la Ley Foraker de 1900. (36) A través de esta ley el Congreso logró sus dos metas más apremiantes: crear un aparato colonial para reemplazar el régimen militar que gobernaba Puerto Rico desde su invasión y recaudar dinero para financiar esta nueva administración.

22. La ley proveía para el establecimiento de un gobierno civil compuesto por un gobernador, un tribunal supremo y alto cuerpo legislativo nombrados por el presidente, con una cámara baja electa por los puertorriqueños. (37) Importantemente, también estableció un impuesto a bienes importados a Puerto Rico desde Estados Unidos, recaudos del cual serían usados para sufragar los gastos del recién establecido gobierno territorial. (38) Ya que tal impuesto alegadamente violaría el artículo de uniformidad de la Cláusula de Impuestos y Gastos de la Constitución, (39) este fue retado como inconstitucional y entonces vinieron los Casos

Insulares, (40) que le proveyeron al Tribunal Supremo la oportunidad de definir la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico -- y determinar el poder del congreso sobre este último.

23. El Tribunal Supremo, que era casi el mismo tribunal que había validado la segregación racial en el sur en *Plessy v. Ferguson* (41) justo cinco años antes en 1896, sonó el clarín de los imperialistas y contestó con decretos que endosaban su antidemocrática ideología y licenció los esfuerzo del Congreso de hacer realidad sus ideales en su gobernanza del nuevo imperio colonial de Estados Unidos.

24. El Tribunal Supremo no solamente ignoró totalmente el precedente controlador de *Loughborough v. Blake*, (42) , decidido en 1820, el cual incondicionalmente determinó que la prohibición contra la no uniformidad en impuestos aplicaba a todos los territorios - en ese caso al Distrito de Columbia - sino que, tal vez en una acción aun más deshonrosa circunvaló el precepto constitucional explícito y no ambiguo pronunciado por el magistrado presidente Taney inequívocamente prohibiendo el establecimiento o el mantenimiento de colonias por Estados Unidos. En vez de seguir su precedente, el tribunal dio su bendición a la creación por el Congreso de un sistema colonial estadounidense bajo el disfraz de algo inventado del

aire por el tribunal, la supuesta doctrina de la incorporación territorial. Conforme a esta teoría a los habitantes de Puerto Rico, como residentes de un “territorio no incorporado”, se les negaría todas excepto las más fundamentales protecciones constitucionales y al Congreso se le otorgó casi ilimitados poderes plenos. La supuesta propuesta congressional PROMESA es solamente el más reciente ejemplo de cómo el Congreso todavía ejerce estos poderes. Ha habido muchas otras manifestaciones a través de los 116 años del dominio colonial estadounidense.

25. El estatus de Puerto Rico y el de sus ciudadanos no ha cambiado ni una iota durante este periodo. Solo cinco años después que a los puertorriqueños se les otorgara la ciudadanía estadounidense en 1917, (43) el Tribunal Supremo decretó, bastante increíblemente, en *Balzac v. Porto Rico*, (44) que lo único que la otorgación de ciudadanía estadounidense significaba para los puertorriqueños era que podían mudarse a Estados Unidos y allí ejercer los derechos plenos como ciudadanos, pero que no tenían derecho a los derechos plenos de los ciudadanos estadounidenses mientras residieran en Puerto Rico - tales como, en el caso *Balzac*, el derecho a un juicio por jurado.

26. Si se necesita otro ejemplo ridículo de esta proposición, heme aquí, un juez del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos,

sentado en el segundo tribunal más alto de Estados Unidos, votando y decidiendo casos que tienen importancia nacional, quien debido a que resido en Puerto Rico, donde nací y tengo mis raíces, no puedo votar por el presidente o el vicepresidente ni reclamar representación en el cuerpo legislativo que aprueba las leyes que gobiernan y tocan toda faceta de mi vida en Puerto Rico. Olvidado, por un momento, todos los conceptos de la protección equitativa, el debido proceso o hasta la justeza, ¿tiene esto algún sentido?

27. Debido a que mi tiempo es limitado y porque deseo poner ante este foro los datos que demuestran más allá de una duda razonable cómo Puerto Rico ha sido explotado al estilo clásico colonial, y cómo esto ha llevado a nuestro estado pésimo actual, permítanme antes de seguir adelante colocar ante ustedes la definición del término “colonia”, que tomo del UNESCO’S DICTIONARY OF THE SOCIAL SCIENCES. El término “colonia” es definido allí como “un territorio subordinado de varias maneras - política, cultural o económica - por un país más desarrollado (en el cual) el poder legislativo supremo y gran parte de la administración descansa en el país controlador, el cual (es) usualmente de un grupo étnico distinto al de la colonia”. (45) Uno tendría que estar seriamente incapacitado en todo sentido si concluye que esta definición no le queda como un guante

a la relación Estados Unidos-Puerto Rico.

28. Esta irrefutable condición colonial, resultado directo de los Casos Insulares y del régimen que estos legalizaron, continúa dictando el destino de la isla y sus habitantes hoy día. (46) Cualquier intento de deshacer o circunvalar este estado denigrante como la causa de sus aprietos actuales, en el mejor de los casos, engañoso. Es el precursor, la causa subyacente y el catalizador actual de la debacle económica en que se encuentra Puerto Rico, ya que ha propiciado, si no promovido, la explotación significativa y en curso por parte del capital estadounidense perjudicando a Puerto Rico y sus ciudadanos desde el primer día.

29. Podríamos apropiadamente etiquetar los años entre 1900 y 1945 como el periodo de la “criptoplantación”. Anterior a eso, hacia el final del régimen español, el café había sido la cosecha principal de Puerto Rico. Los acres de café eran el doble de los sembrados con caña de azúcar, más del 99 por ciento de las granjas eran trabajadas por sus dueños y estas granjas promediaban cinco acres en tamaño. (47)

30. Casi de la noche a la mañana, de hecho para el 1900, Puerto Rico se convirtió en una gran plantación de azúcar, mayormente explotada por megaindustrias de Estados Unidos, las mayores de estas teniendo sus

sedes en Massachusetts, Nueva Jersey y New York. (48) El terreno de la caña de azúcar se triplicó de lo que era en 1896 (49) y para 1917 un número relativamente pequeño de individuos, sociedades y corporaciones era dueño de casi la mitad de toda la tierra llana labrantía de Puerto Rico. (50) La economía y la población de la isla se convirtió totalmente dependiente de esa única cosecha, con la caña de azúcar cruda siendo convertida en melaza y enviada en medida gruesa hacia Estados Unidos para ser refinada en azúcar de mesa. (51)

31. Estos gigantes azucareros produjeron dividendos tan altos como 115% en las inversiones, (52) con los cuatro más grande jactándose de un rédito promedio de un 22.5% entre 1923 y 1930. (53) Tres de estos azucareros le distribuyeron a sus accionistas más de \$60 millones en dividendos entre 1920 y 1935 - más de \$1,000 millones en dólares actuales. (54) La vasta mayor parte de las ganancias producidas del trabajo de los obreros locales salió de Puerto Rico para nunca más ser vista.

32. El periodo de la criptoplantación creó una gran población sin terreno que vivía bajo el nivel de pobreza, escasamente por encima de los requisitos de subsistencia. El 80 por ciento de la población rural no tenía terreno. (55) Aunque entre 1915 y 1925 los salarios en la industria azucarera aumentó

de 60 centavos diarios a \$1.00 diario, el costo mínimo de una dieta familiar en las zonas azucareras era 55.5 centavos diarios. (56)

33. La industria azucarera puertorriqueña, a pesar de pagarle a su fuerza laboral salarios miserablemente bajos, no podía competir con otras zonas productoras de azúcar sin la ayuda sustanciosa del gobierno federal. La dependencia de ayuda federal relacionada con el azúcar fue el comienzo de un patrón de dependencia de muletas federales de varios tipos que aumentaron exponencialmente, convirtiéndose en una característica de la economía puertorriqueña y con el tiempo contribuyendo a su colapso, cuando tal ayuda no estaba disponible o proporcionalmente no disponible.

34. En 1930 el ingreso anual per capita en Puerto Rico era un quinto del de Estados Unidos, solo \$122. (57) Durante los próximos tres años este se contrajo a solamente \$85 como resultado de la Gran Depresión. (58) Ante las condiciones de casi hambruna, y con el trabajo agrícola limitado a solamente parte del año, (59) la población rural sin terreno se dirigió en manadas hacia las ciudades, particularmente hacia San Juan. (60) Grandes arrabales surgieron con tantas como 100,000 personas viviendo en condiciones deprimentes, (61) totalmente abrumando la capacidad del gobierno local de proveer ayuda o alivio. Según descrito por

un observador de los estados:

35. *“Vi, en pocas palabras, miseria, enfermedad, mugre, suciedad. Sería bastante lamentable ver esto en cualquier lugar ... Pero verlo en un territorio estadounidense, entre gente que Estados Unidos ha gobernado desde 1898, en una región para la cual nuestra responsabilidad ha sido completa durante 43 años, es un choque paralizador a cualquiera que crea en los estándares estadounidenses de progreso y civilización”.* (62)

36. Alimento para el pensamiento, dadas las circunstancias actuales.

37. De 1898 a 1993 Estados Unidos gastó menos de tres cuartos de millón de dólares en Puerto Rico anualmente. (63) Durante el mismo periodo las empresas estadounidenses convirtieron a Puerto Rico en un mercado cautivo. Para 1910 casi todas las exportaciones de Puerto Rico fueron a Estados Unidos, (64) un patrón que casi no ha cambiado hasta hoy día. (65) Para la década de 1940 Puerto Rico sería uno de los clientes más importantes de Estados Unidos, así como uno de sus más importantes proveedores de materia prima. (66) El patrón de la era azucarera persistía, con exportaciones de materia prima producida por la colonia intercambiada por importaciones de productos terminados de la metrópolis, promoviendo un balance negativo de pagos contra

el lado colonial. (67)

38. Como si eso no fuese suficiente, la Ley de Marina Mercante de 1920, también llamada Ley Jones, (68) requiere que toda la carga marítima transportada entre la isla y Estados Unidos sea transportada en buques fabricados en Estados Unidos, operados por tripulaciones estadounidenses, ambos de los cuales son los más costosos en el campo marítimo. (69) Esto, por supuesto, resulta en un aumento en el costo de todo lo enviado hacia y desde Puerto Rico como lo hace enviarlos hacia la República Dominicana o Jamaica. (71)

39. La llegada a Puerto Rico del Nuevo Trato, y poco tiempo después la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, trajo algo de alivio a esta golpeada tierra. (72) Los salarios de los trabajadores de la caña se duplicó de 1940 a 1945 a un enorme 30 centavos por hora, (73) el desempleo bajó de 18 por ciento en 1940 a 13 por ciento para 1950. (74) Esta reducción en desempleo fue resultado de gastos directos del gobierno federal de más de \$257 millones de 1933 a 1942, (75) un aparente cambio en política traído por la anticipación de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de fortificar Puerto Rico para proteger el flanco sur de Estados Unidos y acercamientos al Canal de Panamá.

40. Puerto Rico se convirtió prácticamente en un campamento militar. La milicia expropió vastas franjas de terreno y con el tiempo ocupó el 14 por ciento del total del área terrestre de Puerto Rico, la mayor proporción de tierra ocupada por la milicia en cualquier jurisdicción estadounidense. (76) Muchas bases militares estaban ubicadas en lugares agrícolas y turísticos de primera categoría. En dos islas-municipios habitadas por civiles, Vieques y Culebra, la Marina de Estados Unidos realizó bombardeos navales, así como operaciones anfibia, durante los próximos 60 años, sin importar décadas de oposición por sucesivas administraciones locales. En 1999, cuando esta oposición erupcionó en masivas protestas cívicas después que un civil murió en una de las rondas de bombardeo, la Marina finalmente discontinuó sus operaciones de bombardeo - pero tomó represalia contra la población cerrando todas sus bases en Puerto Rico de un día para otro, perturbando la economía de la isla. (77) Hasta el día de hoy el gobierno estadounidense se niega a limpiar adecuadamente o compensar a los residentes por los daños ambientales, ecológicos y a la salud infligidos por las operaciones militares. (78) Ya que las acciones judiciales comprobaron ser fallidas, no se le ha dejado a los residentes ningún otro recurso que pedirle socorro al Congreso. (79) Por supuesto, nada ha pasado, otra vez porque los ciudadanos de segunda clase de Puerto Rico

no tienen influencia política cuando de esa sala se trata.

41. Al final de la Segunda Guerra Mundial la creación de las Naciones Unidas, con su supuesta postura anticolonial codificada en su Carta (80) abrió nuevas posibilidades para muchos pueblos colonizados. Estados Unidos, siendo un auspiciador principal de la ONU y de la descolonización por Gran Bretaña y Francia, fue obligado a reevaluar públicamente su relación con Puerto Rico y sus habitantes ciudadanos estadounidenses. El Congreso dio un paso estratégico en esa dirección en 1950 promulgando la Ley 600, la cual autorizaba a los puertorriqueños a redactar su propia constitución local sujeta a aprobación congresional. (81) El Congreso subsecuentemente aprobó, después de algunas ediciones, una constitución puertorriqueña que permitía una medida limitada de autogobernación, (82) que incluía el derecho a elegir un gobernador y una legislatura, así como nombrar funcionarios gubernamentales locales, incluyendo jueces.

42. Lo que siguió fue una carrera hacia la ONU por parte de Estados Unidos para buscar para Puerto Rico una dispensa de los requisitos de la ONU de reportar que fueron impuestos a aquellos países que tuvieran territorios que no tuvieran gobierno propio. Esto fue logrado con mucha artimaña y

torceduras de brazos por los representantes de Estados Unidos, confabulados con algunos líderes políticos puertorriqueños, (83) una hazaña descrita por algunos, exactamente, en mi opinión, como “un engaño monumental”. (84) Aunque estas acciones resultaron en la remoción de Puerto Rico de la lista colonial de la ONU, la Ley 600 fue, en el mejor de los casos, una medida cosmética. Nosotros los ciudadanos de Puerto Rico continuamos despojados nacionalmente, sin poder votar por el presidente o vicepresidente o ser representados en el Congreso por representantes y senadores votantes y por lo tanto no tenemos voz respecto a las leyes que aplican a nosotros.

43. Al momento en que la P. L. 600 estaba siendo promulgada, la industria azucarera finalmente murió en Puerto Rico, víctima de aumentados costos de producción y de la competencia de otras zonas azucareras. (85) Esto formó el ímpetus detrás de la Operación Manos a la Obra, proyecto conjunto entre los gobiernos federal y puertorriqueño diseñado para crear una nueva base industrial en la isla. (86) Como resultado de este programa, la base industrial de Puerto Rico creció exponencialmente durante los próximos 40 años.

44. Entre 1960 y 1976 la inversión directa estadounidense en Puerto Rico se disparó y Puerto Rico representaba el 40 por ciento de

todas las ganancias de empresas estadounidenses en América Latina. (87) Esta bonanza fue facilitada por cláusulas especiales de impuestos federales y puertorriqueños que parcial o completamente eximían de impuestos a las corporaciones estadounidenses que operaban en Puerto Rico. (88) Esto sería alimentado adicionalmente por la Sección 936 del Código de Rentas Internas, (89) aprobado en 1976, que, con la explícita orientación de crear empleos en Puerto Rico y otros territorios, extendía mayores incentivos fiscales a corporaciones estadounidenses que pudieran demostrar que la vasta mayoría de sus ingresos se derivaban de fuentes en una “posesión”. (90) Para 1977 varias corporaciones multinacionales importantes estaban reportando que más de un cuarto de sus ganancias mundiales provenían de operaciones en Puerto Rico. (91) Las empresas químicas y farmacéuticas fueron las más beneficiadas del amparo de la Sección 936: Johnson & Johnson, Smith-Kline, Merck, y Bristol-Meyers por sí solas ahorraron miles de millones en impuestos entre 1980 y 1990. (92)

45. Pero estos días idílicos llegarían al final como resultado de la avaricia corporativa. Las compañías con altos gastos de investigación, desarrollo y mercadeo pero bajos costos de producción transfirieron su producción, patentes y marcas comerciales a subsidiarias en Puerto Rico para escudar

de los impuestos federales sobre el ingreso toda ganancia producida por estos productos. (93) Aunque estas manipulaciones convirtieron Puerto Rico en el centro de ganancias número uno en el mundo del capital estadounidense, estas también le costaron al gobierno federal casi \$3,000 millones anuales en ingresos contributivos perdidos algunos años. (94) Por supuesto, como en el caso de la industria azucarera, poca, si alguna, de la ganancia de las industrias de la Sección 936 se quedó en la isla.

46. En gran medida como resultado del abuso de la exención por parte de las corporaciones de la Sección 936, en 1996 el Congreso decidió hacer algo sobre esa cláusula. (95) Desafortunadamente, en vez de cerrar las fisuras legales, el Congreso eliminó la cláusula del todo. (95) Esto resultó en que la mayoría de las compañías de la Sección 936 se mudaran a zonas libres de impuestos, como Irlanda y los países favorecidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tales como México. Las corporaciones se llevaron los empleos que habían creado - la razón para la promulgación de la Sección 936 en primer lugar - y toda posibilidad de que Puerto Rico se recuperara del caos económico provocado por la industria azucarera, dejando a miles sin empleo y sumiendo la economía de Puerto Rico en un espiral descendente.

47. En la agonía de este supuesto “espiral de muerte”, la economía actual de Puerto Rico se ha tornado aun más dependiente de las remesas de Estados Unidos. La isla recibe aproximadamente \$16,000 millones anualmente en subsidios estadounidenses y ayuda del gobierno. (96) Pero el balance del comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos se mantiene igual: aproximadamente el 90 por ciento de las exportaciones de Puerto Rico va a Estados Unidos y los estados continentales a cambio son responsables por una proporción similar de importaciones. (97) La totalidad de esta secuencia de eventos, comenzando con la era de la economía azucarera hasta el presente y el actual estado de las cosas, dejan a Puerto Rico - que ha contribuido más riqueza a Estados Unidos que cualquier país en la historia y es uno de los mayores mercados cautivos de los productos estadounidenses - como un conducto para el gobierno federal subsidiar la industria estadounidense, ya que los subsidios a la isla son inevitablemente repatriados cuando los puertorriqueños compran con esos fondos productos hechos en Estados Unidos. En vista de este hecho de la vida económica, es particularmente irónico que el Congreso discrimine contra Puerto Rico y sus ciudadanos al asignar este dinero.

48. El desequilibrio discriminatorio en subsidios a los ciudadanos de Puerto Rico

versus sus contrapartes de Estados Unidos ha venido durante mucho tiempo y, desafortunadamente, ha sido sancionado judicialmente. (98) El Tribunal Supremo ha justificado el trato discriminatorio del Congreso hacia los residentes estadounidenses en Puerto Rico en dos casos - Harris v. Rosario (99) y Califano v. Torres (100) - razonando que “mayores beneficios podrían perturbar gravemente la economía puertorriqueña”. (101) Esta es una conclusión que el magistrado Marshall comprensiblemente rechazó como equivalente a decir que el Congreso tenía la intención de ayudar menos a los más pobres y mantener a Puerto Rico en desventaja. (102)

49. Aun hoy día Puerto Rico recibe solamente una fracción del apoyo federal extendido a sus contrapartes en Estados Unidos. (103) Por ejemplo, Puerto Rico recibe un poco más de un décimo de la cantidad de fondos de Medicaid que son enviados a estados más ricos que tienen poblaciones proporcionalmente similares o menores. (104) Y en Puerto Rico las tasas de reembolso de Medicare son solamente el 60 por ciento de las tasas estadounidenses; lo mismo es cierto para Medicare Advantage. (105) En general, los gastos anuales por cada inscrito en Medicare y Medicaid en Puerto Rico son los más bajos en Estados Unidos. (106) Esta situación es un componente importante de las calamidades financieras de Puerto Rico, ya

que el gobierno local está obligado a cubrir la diferencia de los fondos de servicios médicos de Puerto Rico para proveerle a su población aunque sea beneficios médicos mínimos.

50. Las posibilidades de salir de este hoyo económico son sombrías. Cada día en Puerto Rico 11 personas o familias pierden sus hogares debido a su incapacidad de satisfacer los pagos hipotecarios. (107) Casi la mitad de la población vive bajo el nivel de pobreza, comparado con el 15.5 por ciento nacionalmente o el 11 por ciento de Connecticut y el 17 por ciento de Oklahoma, (18) estados que reciben \$56,000 millones y \$38,000 millones respectivamente en subsidios anuales comparados con los \$21,000 millones de Puerto Rico a pesar de tener poblaciones comparables. (109) A esto debe añadirse que el ingreso promedio por hogar en Puerto Rico es menos de \$19,000, comparado con \$70,000 y \$48,000 en Connecticut y Oklahoma respectivamente, (110) y no llega ni siquiera cerca del ingreso en Estados Unidos, dado los muchos factores que aumentan el costo de vida en Puerto Rico por encima de esos estados.

51. Según anteriormente explicado, históricamente y actualmente el problema fundamental básico de la economía puertorriqueña siempre ha sido que es una economía que genera una cantidad significativa de

riqueza pero retiene poca de esta, que es una circunstancia típica colonial. (111) Las industrias principales de Puerto Rico - química, farmacéutica, electrónica y fabricación de equipo científico - todas son dominadas e impulsadas por corporaciones multinacionales con sede en Estados Unidos, cuyas ganancias de sus operaciones en Puerto Rico sobrepasaron los \$14,000 millones considerando solamente 1995. (112) Es la misma historia cuando se trata del turismo, la segunda industria más grande de Puerto Rico, que emplea el nueve por ciento de la fuerza laboral, con casi todos los hoteles siendo propiedad o controlados por capital estadounidense. (113) Todo junto, casi cuatro de cada diez dólares producidos por trabajadores puertorriqueños termina en las arcas de una compañía estadounidense. (114)

52. Añadido a esto está una increíble tasa de desempleo: Ahora casi en el 12 por ciento, (115) durante los últimos 10 años esta se ha deslizado hasta cerca del 17 por ciento y nunca ha estado bajo el 10 por ciento (116) y se mantiene un cinco por ciento más alta que la de cualquier estado estadounidense, (117) o hasta Detroit, que recientemente solicitó la quiebra bajo secciones del Código de Rentas Internas que se le han negado a Puerto Rico. (118) Es como resultado de estas fuerzas y fenómenos que casi la mitad de los puertorriqueños vive bajo el nivel estadounidense de la pobreza. (119) Y

es como resultado de la pobreza y el desempleo endémicos que varias olas de puertorriqueños han emigrado hacia otras partes de Estados Unidos. (120) Somos testigos ahora de una de tales olas: Desde el 2010 más 178,000 puertorriqueños se han ido de la isla buscando trabajo. (121) Hoy día más puertorriqueños residen en los 50 estados que en Puerto Rico. (122)

53. Dado este trasfondo, era inevitable que Puerto Rico en su momento enfrentara una crisis fiscal grave, una causada principalmente y perpetuada por su castrada condición política. La era de la criptoplantación dejó a Puerto Rico y su población en un estado económicamente deprimido. La eliminación de la Sección 936 por el Congreso sin proveer una alternativa para mitigar las resultantes tremendas pérdidas de empleo cortaron la recuperación económica de la isla; la recesión económica de Estados Unidos devastó la ya frágil y colonialmente dependiente economía puertorriqueña; y finalmente el éxodo masivo de puertorriqueños buscando trabajo en otros lugares, muchos de los cuales eran diestros y productivos, vastamente redujeron la base contributiva de la isla y redujeron los ingresos. En conjunto, estos eventos tuvieron un efecto negativo y multiplicador que demolió la base económica de Puerto Rico y su gobierno.

54. Como era de esperarse, Puerto Rico fue dejado sacudido por aquellos que anteriormente obtuvieron ganancias de los buenos tiempos de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Aunque Puerto Rico ni ninguno de sus organismos habían incumplido en sus obligaciones de deuda, (123) varias de las entidades acreedoras, lideradas por Moody's, progresivamente degradaron los bonos de Puerto Rico por primera vez en su historia en anticipación al impago. (124) Esto tuvo un efecto avalancha, activando cláusulas de aceleración, aumentando las tasas de interés a las cuales el gobierno puede tomar dinero prestado, reduciendo el acceso a los mercados de capital y limitando más la liquidez y la flexibilidad financiera de estas entidades. Los eventos subsiguientes son materia de conocimiento público y no se necesita repetirlos en detalle aquí.

55. El innegable hecho y causa del dilema de la isla es que hay un incuestionable déficit democrático en la relación Estados Unidos-Puerto Rico. Este déficit simplemente no puede ser cuestionado seriamente en el 2016, particularmente ya que una mayoría del electorado puertorriqueño expresamente rechazó el status actual en el plebiscito del 2012. (125)

56. Más allá de la naturaleza patentemente inconstitucional de este régimen colonial, numerosos acuerdos internacionales

en los cuales Estados Unidos ha entrado le requieren tomar medidas específicas para terminar esta denigrante relación colonial y concederle igualdad política a todos sus ciudadanos. Liderando este cuerpo de leyes de tratados (126) está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), (127) acuerdo internacional que había sido ratificado por 104 naciones para cuando el Senado de Estados Unidos siguió a los demás el 12 de abril de 1992. (128) En lenguaje no ambiguo Estados Unidos acordó que “todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación”, y que “por virtud de ese derecho ellos determinarán sus status políticos”. (129) También se comprometió a que todos los ciudadanos “tendrán” el derecho a votar (130) y consintió a aceptar cualesquiera leyes o medidas requeridas para garantizar ese derecho y todos los demás que están en el ICCPR. (131)S

57. Estados Unidos no ha levantado un dedo para cumplir estas claras obligaciones de tratados, pero se ha opuesto activamente en los tribunales a cualquier intento de asegurar la implementación nacional de sus disposiciones. Tenemos el ejemplo más notorio de esto en *Igartúa-de la Rosa v. United States*, (132) en el cual el Primer Circuito decretó que el lenguaje del ICCPR no establece que el tratado es “autoejecutor” y por lo tanto estos derechos no son aplicables en ausencia de una legislación nacional

a tal efecto. Esta es una conclusión totalmente errónea por muchas razones que requerirían demasiado tiempo para explicarse en esta ocasión. (133) Basta decir para propósitos actuales que esta es una conclusión que va en directa contravención al reconocimiento del Senado al momento de su ratificación del ICCPR de que el gobierno federal estaba, en virtud de la ratificación, obligado a aplicar el tratado. (134) Es difícil entender cómo un tribunal podría concluir que el ICCPR, repleto de lenguaje “hará”, no es obligatorio y autoejecutable. La relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos viola no solamente nuestra ley constitucional, sino también múltiples tratados internacionales que ahora son leyes estadounidenses por la propia acción del Senado. (135)

58. Adredemente no he discutido la contribución del sistema político establecido de Puerto Rico al fiasco en que se encuentra la isla actualmente, aunque este indudablemente lleva por lo menos parte de la culpa, primero que todo, porque tal incursión implicaría una discusión sin ninguna finalidad o un resultado productivo previsible, y segundo porque al final, si llegásemos a una finalidad, lo único que encontraríamos es que la principal causa subyacente a los problemas de Puerto Rico es su condición colonial. Aunque las entidades políticas de Puerto Rico necesariamente han tenido un rol, el suyo no ha sido uno limitado ni

parroquial, sino que, más importantemente, en mi opinión, no uno decisivo. Cualquier distracción de esa máxima verdad, de que nuestra condición colonial es la causa primaria de la debacle que ahora enfrentamos, le resta a los esfuerzos de encontrar una solución.

59. Hay tan poca duda en mi mente sobre el camino apropiado para terminar el perenne colonialismo de Puerto Rico. Arriesgándome a simplificar demasiado un problema que no es simple o fácil de resolver, me aventuro a sugerir que lo que tenemos aquí es un asunto masivo de derechos civiles que podría ser mejorado solamente adoptando una agenda de derechos civiles y entrando en el tipo de acciones que han comprobado ser eficaces en la promoción de los derechos civiles. No tenemos que reinventar la rueda. Hay muchos éxitos de los cuales podemos tomar ejemplos e inspiración. Ya es hora de que los puertorriqueños unan sus esfuerzos a lo largo de este frente. Tal movida, si acaso, está retrasada.

60. Cerrando, ofreceré una disculpa por terminar en una nota aun más sombría que cualquiera que haya tocado ya. Mi observación final es esta: Si la historia nos enseña algo es que las acciones extremas provocan reacciones extremas. Cualquier criatura que sea acorralada se defenderá. Si el Congreso continúa en ese camino actual, si

PROMESA es un reflejo de sus intenciones respecto a Puerto Rico, este debe tener cuidado de que sus acciones abusivas no activen no simplemente desobediencia civil o resistencia, sino radicalización y violencia abierta del tipo que Puerto Rico vio en las décadas de 1930, 1940 y 1950. Ya hay murmullos y agitación. Y así les dejo con este pensamiento: Tenemos que tener esperanza de que el Congreso y otros en lugares altos noten y consideren las consecuencias potencialmente explosivas de lo que le están “PROMESA-ndo” a Puerto Rico y a su población ciudadana estadounidense, que es nada menos que chocante en el contexto de una relación tan explotadora como la de Estados Unidos respecto a Puerto Rico.

61. Gracias por su paciencia escuchándome. Les deseo el mayor de los éxitos durante esta elogiada conferencia y más allá.

A DISCUSSION OF SOME OF THE OUTSTANDING
CONSTITUTIONAL AND INTERNATIONAL LAW
ISSUES THAT ARE RAISED BY
THE UNITED STATES-PUERTO RICO RELATIONSHIP

Original text

1. President Travis and faculty of this distinguished institution, fellow presenters, members of the student body, guests and other attendees, a very good afternoon to you all. I commence my remarks by expressing my appreciation for having been given the opportunity to participate in this important forum and to discuss with you some issues that I believe are of fundamental importance to the several million disenfranchised United States citizens that reside in Puerto Rico.

2. I must confess to a modicum of uneasiness in making my remarks at this particular time, which awkwardness is caused by the uncertain environment in which the U.S.-P.R. relationship presently finds itself, firstly, by reason of two cases that are pending resolution by the Supreme Court of the United States, *Puerto Rico v. Sanchez Valle* (2) and the consolidated cases of *Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust* (3) and *Acosta-Febo v. Franklin California Tax-Free Trust*, (4) which have already been argued and are awaiting decision, and secondly, because Congress is now

considering legislation entitled the “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act,” to which some cynic with a sickly sense of humor has attached the acronym “PROMESA,” which in Spanish means “promise,” pursuant to which the Government of Puerto Rico will be placed in virtual trusteeship by the U.S. Government and Congress. In point of fact, the outcome of either the cases or the attempt to pass this proposed legislation — or both — could very well make academic, if not moot, much or all of what I will comment upon today.

3. Needless to say, I cannot, and will not, publicly speculate on the outcome of these cases, or what Congress in its infinite wisdom has in store for Puerto Rico and its citizens, but I think I can safely state the obvious: These cases and/or this legislation could drastically change the U.S.-P.R. scenario depending on which of several paths the Court chooses to take in resolving the basic questions the cases raise, and what it is that Congress eventually enacts to “assist” the people of Puerto Rico. The final product of the cases could run a gamut of results. What Congress will produce is anyone’s guess, but judging from the so-called “discussion draft” of PROMESA, it does not appear that Puerto Rico is about to be released from the colonial grip of the plenary powers that were authorized by the Insular Cases, (5) but that in fact this grip will be tightened

to a virtual stranglehold. I have decided to proceed with my prepared remarks to place before you several matters that I think may serve you well as background when these cases are decided and/or Congress's efforts bear fruit.

4. So without further ado, let me begin.

5. Even as we proceed well into the 21st century and this country actively promotes our democracy to the rest of the world, we unfortunately do not always practice what we preach. This is particularly true with reference to the constitutional and political rights of those who reside in our various outlying non-state jurisdictions, in areas which we euphemistically refer to as "territories" or "possessions," when, as I will attempt to convince you, they are, de facto and de jure, colonies. There should be no question about this asseveration as regards American Samoa, Guam, or the U.S. Declaration Regarding Non-Self Governing Territories. (6)

6. Although the United States ceased filing these reports for Puerto Rico in 1952 following representations to the United Nations to the effect that Puerto Rico had become a self-governing entity by reason of the establishment of the Commonwealth of Puerto Rico, these avowals in my opinion did not represent the true legal or constitutional

situation when they were made, nor have they become any more true at any time since then to the present. (7) If you have any doubts, I would refer you to statements made by the United States in the amicus brief filed by the Solicitor General before the Supreme Court in *Puerto Rico v. Sanchez Valle*, (8) in which the United States argues that the approval of self-government for Puerto Rico in 1952 did not change Puerto Rico’s fundamental constitutional status as a U.S. territory, subject to the paramount authority of Congress under the Territorial Clause. (9)

7. A perhaps even more poignant and present example of Congress’s colonial control over Puerto Rico lies with the proposed PROMESA legislation, which, among other things, would establish a so-called “Oversight Board,” a non-elected entity of seven members appointed by the President. (10) This Board will have the power to impose a deadline on the Government of Puerto Rico for developing a fiscal plan and budget that meet Congress’s criteria — as well as the right to reject Puerto Rico’s proposals and substitute its own instead. (11) Puerto Rico will not, of course, be represented on the Oversight Board: Unlike the previous version of the legislation, which suggested that at least two of the then-five members of the Board must already live or have a primary place of business in Puerto Rico to be appointed, the version introduced in the

House on Tuesday only requires one member “shall maintain a primary residence . . . or have a primary place of business” in Puerto Rico, leaving open the possibility of filling this slot with anyone willing to move to Puerto Rico to satisfy that criterion. (12) Although the Governor is nominally part of the Board, he is only an “ex officio” member without any voting rights. (13) The legislation also gives the Board the prerogative to demand any information and documentation it believes may be relevant from the Government of Puerto Rico (14) and requires the Puerto Rico legislature to submit all acts it passes, along with estimates of their cost, to the Oversight Board for evaluation in short order. (15) If the Board determines that an act is not consistent with the approved fiscal plan, it may unilaterally dictate that the act be changed or simply overrule the Government of Puerto Rico to block its enforcement or application. (16) The Board may also require the Government of Puerto Rico to submit all contracts and leases to the Board for approval. (17) And, of course, Puerto Rico will also have to get the Board’s approval before it can “issue debt or guarantee, exchange, modify, repurchase, redeem, or enter into similar transactions with respect to its debt.” (18)

8. Tucked into this legislation is another provision which is perhaps even more pernicious to Puerto Rico and its people’s future

given the Island's limited land and natural resources. I refer to Section 405 of PROMESA, which would open up thousands of acres of protected land in Puerto Rico to private development. (19) Even the Secretary of the Interior has condemned this provision (20)

9. The PROMESA legislation is just the latest chapter. There is more damning evidence throughout history of the United States' colonial hold over Puerto Rico. Review of this evidence and relationship demonstrates that Puerto Rico's present woes were not only foreseeable but inevitable given the social, economic, and political processes to which Puerto Rico and its inhabitants have been subjected under the sovereignty of the United States.

10. The starting point to this dismal path is the Treaty of Paris of 1898, which ended the Spanish-American War. In providing for the cession of Puerto Rico from Spain to the United States, the Treaty stated, in its Article IX, that "[t]he civil rights and political status of the native inhabitants . . . shall be determined by Congress." (21) This provision was contrary to the unwavering practice and prevalent constitutional law up to then regarding all other territorial acquisitions by the United States. In all prior cases, upon acquiring additional territory, U.S. citizenship and rights were granted to the inhabitants of the newly acquired lands,

irrespective of the means used to add those territories to the Nation's domain. (22)

11. The new practice instituted after the Spanish-American War effected not only a departure from past practice by the United State but a retrogression from how things were in Puerto Rico during Spanish rule, under which the Island was a province of Spain (the equivalent of a state under the U.S. form of government), and Puerto Ricans were full Spanish citizens with the right to elect sixteen delegates and three senators to the Spanish Cortes (the equivalent of our Congress). (23)

12. Although shortly after his arrival General Miles had proclaimed to the Puerto Rican population that the United States would "promote their prosperity and bestow the immunities and blessings of [U.S.] enlightenment and liberal institutions and government," (24) the United States instead imposed a military regime that abolished all forms of democratic representation in local government. Furthermore, despite Miles's bombastic promises, the colonial powers negotiated the Treaty of Paris and enacted Article IX without Puerto Rican participation or even consultation. The treaty and its Article IX were announced to Puerto Rico's inhabitants as a *fait accompli*, in which they were stripped of their Spanish citizenship and rights and required to give

allegiance to a new colonial overseer under whom they would be without any rights except those that Congress, in which they had no vote, chose to grant in the future. As an matter of American constitutional law, Article IX was clearly unconstitutional, for as Justice Kennedy stated in *Boumediene v. Bush*, “[t]he Constitution grants Congress and the President the power to acquire, dispose of, and govern territory, not the power to decide when and where its terms apply.” (25) And, of course, it does not take a rocket scientist to conclude that neither the Treaty of Paris nor any treaty can trump (pardon my language) the Constitution by granting Congress powers that exceed those allowed by that document.

13. Unfortunately, however, the negotiation of the Treaty of Paris and its implementation coincided with a period of imperialist euphoria. The dominant political figures in the United States were enthusiastic exponents of the concept of Manifest Destiny, which promoted American exceptionalism and the expectation that the United States, “thanks to the superior qualities of the Anglo-Saxons . . . and to their democratic institutions, would inevitably absorb their neighbors.” (26)

14. The United States was not writing on a clean slate. What the United States could constitutionally do with territories it

acquired had been categorically established by the Supreme Court back in 1856. In the much maligned (for other reasons) *Scott v. Sanford* case, Chief Justice Roger Taney had written:

15. There is certainly no power given in the Constitution to the Federal Government to establish or maintain colonies bordering on the United States or at a distance, to be ruled and governed at its own pleasure, nor to enlarge its territorial limits in any way, except by admission of new states [N]o power is given to acquire a Territory to be held and governed in a permanently [colonial] character. (27)

16. Perhaps equally important, the *Sanford* Court went on to rule that the Territorial Clause in Article I of the Constitution (28) was not applicable to territories acquired after the United States's independence from Great Britain. Chief Judge Taney held that the Territorial Clause was only relevant to those lands held at the time of the treaty with Great Britain in 1783, (29) namely the Old Northwest Territories, (30) but did not apply to land acquired thereafter. The Court further ruled in 1886, in *Yick Wo Hopkins*, that the Fourteenth Amendment guaranteed equal rights to "all persons within the territorial jurisdiction [of the United States], without regard to any differences of race, of color, or of nationality." (31) But these

rulings, this vital precedent, would be disregarded.

17. Historian Rubin Francis Weston cogently describes what actually happened in the political arena of the times in his book, *Racism in U.S. Imperialism*:

18. Those who advocated overseas expansion faced this dilemma: what kind of relationship would the new peoples have to the body politic? Was it to be the relationship of the reconstruction period, an attempt at political equality for dissimilar races, or was it to be the southern "counterrevolutionary" point of view which denied the basic American constitutional rights to people of color? The actions of the federal government during the imperial period and the relegation of the negro to the status of second class citizenship indicate that the southern point of view prevailed. The racism which caused the relegation of the negro to a status of inferiority was to be applied to the overseas possessions of the United States. (32)

19. The advent of this racially charged imperialistic mania instigated the sharp departure from the past practice to which I have alluded.

20. The transition was not without dissent. The 1899 report of the Carroll Commission,

appointed by President McKinley to investigate prevailing conditions in Puerto Rico, concluded that there should be “no hesitation in affirming that the people [of Puerto Rico] have good claims to be considered capable of self- government.” (33) Unfortunately, the military governor of Puerto Rico challenged the Commission’s recommendations, stating that “[t]he people [of Puerto Rico] generally have no conception of political rights combined with political responsibilities.” (34)

21. An acrimonious debate in Congress followed, and that body sided with General Davis. The decision was greatly influenced by considerations of how a progressive resolution of Puerto Rico’s case could affect the companion bill dealing with the Philippines, as to which one senator warned that we should “beware of those mongrels of the East, with breath of pestilence and touch of leprosy.” (35) With this pernicious atmosphere as background, Congress proceeded to enact the Foraker Act of 1900. (36) Through this Act, Congress accomplished its two most pressing goals: creating a colonial apparatus to replace the military regime that had ruled Puerto Rico since its invasion and raising money to fund this new administration.

22. This statute provided for the establishment of a civil government composed of a

presidentially appointed governor, a supreme court, and an upper legislative body, with a lower house elected by the Puerto Ricans. (37) Importantly, it also established a tax on goods imported into Puerto Rico from the mainland United States, the proceeds of which would be used to defray the expenses of the newly established territorial government. (38) Because such a tax was alleged to violate the uniformity provision of the Taxing and Spending Clause of the Constitution, (39) it was challenged as unconstitutional, and thus came about the Insular Cases, (40) which presented the Supreme Court with the opportunity to define the relationship between the U.S. and Puerto Rico — and determine Congress's power over the latter.

23. The Supreme Court, which was almost to a man the same Court that had validated racial segregation in the South in *Plessy v. Ferguson*, (41) just five years before in 1896 harked the imperialists' clarion call, and answered with rulings that endorsed their undemocratic ideology and licensed Congress's efforts to realize its ideals in its governance of the United States' new colonial empire.

24. The Supreme Court not only totally ignored the controlling precedent of *Loughborough v. Blake*, (42) decided in 1820, which had unqualifiedly determined

that the proscription against non-uniformity in taxation applied to the territories — in that case, the District of Columbia — but, in a perhaps an even more opprobrious action, side-stepped the explicit and unambiguous constitutional precept pronounced by Chief Judge Taney unequivocally prohibiting the establishment or maintenance of colonies by the United States. Instead of following its precedent, the Court gave its benediction to the creation by Congress of an American colonial system under the guise of something invented by the Court out of thin air, the so-called doctrine of territorial incorporation. Pursuant to this theory, the inhabitants of Puerto Rico, as denizens of an “unincorporated territory,” were to be denied all but the most fundamental constitutional protections and Congress was granted almost unlimited plenary powers. The so-called PROMESA congressional proposal is only the latest example of how Congress still exercises these powers. There have been many other manifestations throughout the 116 years of U.S. colonial rule.

25. Puerto Rico’s status has not changed an iota over this period, nor has that of its citizens. Just five years after Puerto Ricans were granted U.S. citizenship in 1917, (43) the Supreme Court ruled, quite incredibly, in *Balzac v. Porto Rico*, (44) that all the granting of U.S. citizenship meant for Puerto Ricans was that they could move to

the Mainland and there exercise full rights as citizens, but that they were not entitled to the full rights of U.S. citizens while residing in Puerto Rico — such as, in the Balzac case, the right to trial by jury.

26. If another ludicrous example of this proposition is needed, here am I, a U.S. Court of Appeals judge, sitting on the second-highest court of the United States, voting and deciding cases that have national import, who, because I reside in Puerto Rico, where I was born and have my roots, cannot vote for President or VicePresident or claim representation in the legislative body that passes the laws that govern and touch every facet of my life in Puerto Rico. Forgetting, for a moment, all concepts of equal protection, due process, or even fairness, does this make any sense?

27. Because my time is limited and because I wish to put before this forum the facts that show beyond a reasonable doubt how Puerto Rico has been exploited in classical colonial style, and how this has led to our present sorry state, let me before going further place before you the definition of the term “colony,” which I take from UNESCO’S DICTIONARY OF THE SOCIAL SCIENCES. The term “colony” is therein defined as “a territory, subordinate in various ways — political, cultural, or economic — to a more developed country [in which] [s]upreme

legislative power and much of the administration rest[s] with the controlling country, which [is] usually of a different ethnic group from the colony.” (45) One would have to be seriously impaired in every sense to conclude that this definition does not fit the U.S.-P.R. relationship like a glove.

28. This irrefutable colonial condition, the direct result of the Insular Cases and the regime that they legalized, continues to dictate the fate of the Island and its inhabitants today. (46) Any attempt to divest or bypass this denigrating status as the cause for its present predicament is at best delusive. It is the forerunner, underlying cause, and current catalyst of the economic debacle in which Puerto Rico finds itself, for it has enabled, if not promoted, significant and ongoing economic exploitation by American capital to the detriment of Puerto Rico and its citizens — since day one.

29. We could appropriately label the years between 1900 and 1945 as the crypto-plantation period. Prior to that, towards the end of the Spanish regime, coffee had been Puerto Rico’s principal crop. Coffee acreage was twice that planted with sugar cane, more than ninety percent of farms were worked by those who owned them, and these farms averaged five acres in size. (47)

30. Almost overnight, in fact by 1900,

Puerto Rico became one huge sugar plantation, mostly exploited by mega-enterprises from the Mainland, the largest of which were based in Massachusetts, New Jersey, and New York. (48)

31. Sugar cane acreage tripled from what it was in 1896, (49) and, by 1917, a relatively small number of individuals, partnerships, and corporations owned almost all of the arable lowland of Puerto Rico. (50) The Island's economy and population became totally dependent on that one crop, with the raw sugar cane being turned into molasses and shipped in bulk to the Mainland for refinement into table sugar. (51)

32. These sugar giants produced dividends as high as 115% on investment, (52) with the four largest boasting an average return on investment between 1923 and 1930 of 22.5%. (53) Three of these sugar growers distributed more than \$60 million in dividends to their stockholders between 1920 and 1935 — more than \$1 billion in today's dollars. (54) The vast majority of the earnings produced from the work of the local labor left Puerto Rico, never to be seen again.

33. The crypto-plantation period created a large landless population which lived below the poverty level, barely above subsistence requirements. The rural population,

was eighty percent landless. (55) Although between 1915 and 1925 wages in the sugar industry went up from 60 cents per day to \$1.00 per day, the cost of a minimum family diet in the sugar producing areas was 55.5 cents per day. (56)

34. The Puerto Rican sugar industry, despite paying its work force miserably low wages, could not compete with other sugar-producing areas without substantial assistance from the federal government. This sugar-related dependence on federal aid was the beginning of a pattern of reliance on federal crutches of various kinds that increased exponentially, becoming a “permanent” feature of the Puerto Rican economy and eventually contributing, when such aid was not available or not proportionately available, to its collapse.

35. In 1930, the annual per capita income in Puerto Rico was one-fifth that of the Mainland, just \$122. (57) Over the next three years, it shrank to just \$85 as a result of the Great Depression. (58) In the face of near-famine conditions, and with agricultural work limited to only part of the year, (59) the landless rural population flocked to the cities, particularly to San Juan. (60) Huge slums emerged, with as many as 100,000 people living in dismal conditions, (61) totally overpowering the ability of local government to provide aid or respite. As described

by one Stateside observer:

36. I saw, in short, misery, disease, squalor, filth. It would be lamentable enough to see this anywhere But to see it on American territory, among people whom the United States has governed since 1898, in a region for which our federal responsibility has been complete for 43 years, is a paralyzing jolt to anyone who believes in American standards of progress and civilization. (62)

37. Food for thought, given the present circumstances.

38. From 1898 to 1933, the United States spent less than three-quarters of a million dollars in Puerto Rico per year. (63) Over the same period, American private enterprise converted Puerto Rico into a captive market. By 1910, nearly all of Puerto Rico's exports went to the Mainland, (64) a pattern that has hardly changed to this day. (65) By the 1940s, Puerto Rico would be one of the United States' top customers as well as one of its top suppliers of raw goods. (66) The sugar-era pattern persisted, with raw-materials exports produced by the colony exchanged for finished-goods imports from the metropolis, promoting an increasingly negative balance of payments against the colonial side. (67)

39. As if that were not enough, the Merchant Marine Act of 1920, also called the Jones Act, (68) requires all maritime cargo transported between the Island and the Mainland to be carried on U.S.-built ships, manned by U.S. crews, both of whom are the most expensive in the maritime field. (69) This, of course, results in raising the cost of everything shipped to and from Puerto Rico, including food stuffs and other essentials, and places goods produced in Puerto Rico at a competitive disadvantage. (70) To this day, it costs twice as much to ship goods from the East Coast to Puerto Rico as it does to send them to the Dominican Republic or Jamaica. (71)

40. The arrival of the New Deal to Puerto Rico, and, shortly thereafter, the entry of the United States into World War II, brought some respite to this stricken land. (72) Sugarcane workers' wages doubled from 1940 to 1945, to a whopping 30 cents an hour, (73) and unemployment fell from eighteen percent in 1940 to thirteen percent by 1950. (74) This decrease in unemployment was the result of direct expenditures by the federal government of more than \$257 million from 1933 to 1942, (75) an apparent change in policy brought about by the anticipation of World War II and the need to fortify Puerto Rico to protect the Southern flank of the United States and approaches to the Panama Canal.

41. Puerto Rico became a virtual military camp. The military expropriated vast tracks of land and eventually occupied fourteen percent of the total land area of Puerto Rico, the greatest proportion of land occupied by the military in any U.S. jurisdiction. (76) Many military bases were located on prime agricultural and touristic locales. On two off-shore civilian-inhabited Island-municipalities, Vieques and Culebra, the U.S. Navy conducted air and naval bombardments as well as amphibious operations for the next sixty years, notwithstanding decades of opposition by successive local administrations. In 1999, when this opposition erupted into massive civic protests after a civilian was killed by one of the bombing sorties, the Navy finally discontinued their bombing operations — but retaliated against the local population by closing down all of its bases in Puerto Rico overnight, greatly disrupting the Island's economy. (77) To this day, the U.S. government refuses to adequately clean up or compensate residents for the environmental, ecological, and health damages inflicted by the military operations. (78) As legal actions proved unsuccessful, the residents have been left with no recourse but to petition Congress for relief. (79) Of course, nothing has happened, again because the second-class citizens of Puerto Rico have no political sway when it comes to that venue.

42. The end of the Second World War and

the creation of United Nations, with its purported anti-colonial stance codified in its Charter, (80) opened up new prospects for many colonized peoples. The United States, being a principal sponsor of the UN and of decolonization by Great Britain and France, was forced to publicly reevaluate its relationship with Puerto Rico and its U.S. citizen inhabitants. Congress took a strategic step in that direction in 1950 by enacting Public Law 600, which authorized Puerto Ricans to draft their own local constitution subject to congressional approval. (81) Congress subsequently approved, after some edits, a Puerto Rican constitution that afforded a limited measure of self-government, (82) which included the right to elect a governor and legislature, as well as to appoint local government officials, including judges.

43. What followed was a rush to the United Nations by the United States to seek a dispensation for Puerto Rico from U.N. reporting requirements imposed on those countries with non-self-governing territories. This was accomplished by much chicanery and arm-twisting by the representatives of the United States, in collusion with some leading Puerto Rican politicians, (83) a feat described by some, accurately, in my opinion, as “a monumental hoax.” (84) For although these actions resulted in the removal of Puerto Rico from the UN colonial list, P.L. 600 was, at best, a cosmetic measure.

We citizens of Puerto Rico continue to be disenfranchised nationally, unable to vote for the President or Vice-President, or to be represented in Congress by voting representatives and senators, and thus have no say regarding the laws that apply to us.

44. At about the time P.L. 600 was being enacted, the sugar industry finally died in Puerto Rico, a victim of the increased costs of production and competition from other sugar-producing areas. (85) This formed the impetus behind "Operation Bootstrap," a joint project of the federal and Puerto Rico governments designed to create a new industrial base for the Island. (86) As a result of this program, Puerto Rico's industrial base grew exponentially over the next forty years.

45. Between 1960 and 1976, direct U.S. investment in Puerto Rico skyrocketed, and Puerto Rico accounted for forty percent of all profits by U.S. companies in Latin America. (87) This bonanza was facilitated by special federal and Puerto Rico tax provisions that partially or completely exempted U.S. corporations operating in Puerto Rico from taxation. (88) It would be further fueled by Section 936 of the Internal Revenue Code, (89) passed in 1976, which, with the explicit aim of creating jobs in Puerto Rico and other territories, extended even greater tax incentives to U.S. corporations that could show

the vast majority of their income was derived from sources in a “possession.” (90) By 1977 several major multinational corporations were reporting that more than a quarter of their worldwide profits came from their Puerto Rico operations. (91) Chemical and pharmaceutical companies benefited most from the Section 936 shelter: Johnson & Johnson, Smith-Kline, Merck, and Bristol-Meyers alone saved billions in taxes between 1980 and 1990. (92)

46. But these halcyon days would come to an end as a result of corporate greed. Firms with high research, development, and marketing expenses but low production costs transferred their production, patents, and trademarks to subsidiaries in Puerto Rico to shield all revenue produced by these products from federal income taxes. (93) Although these manipulations turned Puerto Rico into U.S. capital’s number-one profit center in the world, they also cost the federal government nearly \$3 billion in lost tax revenues per year some years. (94) Of course, as in the case of the sugar industry, little if any of the Section 936 industries’ profit remained on the Island.

47. In large part as a result of the Section 936 corporations’ abuse of the exemption, Congress decided to do something about that provision in 1996. (95) Unfortunately, instead of closing the loophole, Congress

eliminated the provision altogether. This resulted in most Section 936 companies relocating to tax-free areas such as Ireland and NAFTA-favored countries, such as Mexico. The corporations took the jobs they had created — the real reason for the enactment of Section 936 in the first place — and any chance that Puerto Rico would recover from the economic havoc wrought by the sugar industry with them, leaving thousands out of work and plunging Puerto Rico's economy into a downward spiral.

48. In the throes of this so-called “death spiral,” Puerto Rico's present economy has become even more dependent on U.S. transfers. The Island receives approximately \$16 billion annually in U.S. government subsidies and assistance. (96) But the balance of trade between Puerto Rico and the Mainland remains the same: About ninety percent of Puerto Rico exports go to the United States and the Mainland is in turn responsible for a similar proportion of imports. (97) The totality of this sequence of events, commencing with the sugar economy era to the present, and current state of affairs render Puerto Rico — which has contributed more wealth to the United States than any country in history and is one of the largest captive markets of U.S. goods — a conduit for the federal government to subsidize U.S. industry, as subsidies to the Island are inevitably repatriated when Puerto Ricans buy

Mainland-made products with these funds. In view of this fact of economic life, it is particularly ironic that Congress discriminates against Puerto Rico and its citizens in the parceling out of these monies.

49. The discriminatory imbalance in subsidies to Puerto Rico's U.S. citizens versus their Mainland counterparts is long-standing and, unfortunately, judicially sanctioned. (98) The Supreme Court has justified Congress's discriminatory treatment of the U.S. residents of Puerto Rico in two cases — *Harris v. Rosario* (99) and *Califano v. Torres* (100) — by reasoning that "greater benefits might seriously disrupt the Puerto Rican economy" (101) This is a conclusion that Justice Marshall understandably rejected as tantamount to saying that Congress meant to help the poorest the least and to keep Puerto Rico at a disadvantage. (102) Even today, Puerto Rico receives only a fraction of the federal support extended to Mainland counterparts. (103) For example, Puerto Rico receives little more than a tenth of the amount of Medicaid funding that is sent to wealthier states with similar or smaller populations. (104) And in Puerto Rico, Medicare reimbursement rates are just 60 percent of Mainland rates; the same is true of Medicare Advantage. (105) Overall, annual per enrollee spending on Medicare and Medicaid in Puerto Rico is the lowest in the United States. (106) This situation is a major

component of Puerto Rico's financial woes, as the local government is forced to cover Puerto Rico's health care funding shortfalls to provide even minimal health benefits to its population.

50. Prospects for climbing out of this economic hole are dim. Each day in Puerto Rico, eleven people or families lose their homes because of inability to meet their mortgage payments. (107) Almost half of the population lives below the poverty level, as compared to 15.5% nationally or 11% in Connecticut and 17% in Oklahoma, (108) states that receive \$56 and \$38 billion respectively in annual subsidies as compared to Puerto Rico's \$21 billion despite comparable populations. (109) To this should be added that the median household income in Puerto Rico is less than \$19,000, as compared to \$70,000 and \$48,000 in Connecticut and Oklahoma, respectively, (110) and does not go nearly as far as income on the Mainland given the many factors that raise the cost of living in Puerto Rico above that in those states.

51. As previously explained, historically, and presently, the basic fundamental problem of the Puerto Rican economy has always been that it is an economy that generates a significant amount of wealth, but retains little of it, a typical colonial circumstance. (111) Puerto Rico's principal industries — chemical, pharmaceutical, electronic,

and scientific equipment manufacturing — are all dominated and driven by U.S.-based multinational corporations, whose net profits from their Puerto Rico operations surpassed \$14 billion in 1995 alone. (112) It is the same story when it comes to tourism, Puerto Rico's second-biggest industry, which employs nine percent of the work force, with almost all hotels owned or controlled by stateside capital. (113)

52. Altogether, nearly four out of every ten dollars produced by Puerto Rican workers ends up in the coffers of a U.S. firm. (114)

53. Added to this is an astonishing unemployment rate: Now almost twelve percent, (115) it has in the last ten years crept close to seventeen percent and never gone lower than ten percent, (116) and remains five percent higher than that of any U.S. state, (117) or even Detroit, which recently filed for bankruptcy under the sections of the Bankruptcy Code denied to Puerto Rico. (118) It is as a result of these forces and phenomena that nearly half of Puerto Ricans live below the U.S. poverty level. (119) And it is as a result of endemic poverty and unemployment that several waves of Puerto Ricans have migrated to other parts of the United States. (120) We are witnessing one such wave now: Since 2010, more than 178,000 Puerto Ricans have left the Island to seek

work. (121) Today, more Puerto Ricans reside throughout the fifty states than in Puerto Rico. (122)

54. Given this background, it was inevitable that Puerto Rico would eventually face a grave fiscal crisis, one principally caused and perpetuated by its politically castrated condition. The crypto-plantation era left Puerto Rico and its population in an economically depressed state. Congress's repeal of Section 936 without providing any alternative to mitigate the resultant tremendous job losses cut short the Island's economic recovery; the Mainland economic recession devastated Puerto Rico's already fragile colonially-dependent economy; and finally, the massive exodus of Puerto Ricans seeking work elsewhere, a large number of whom were highly skilled and productive, vastly reduced the Island's tax base and decreased revenues. Altogether, these events had a negative, multiplying effect which demolished the economic base of Puerto Rico and its government.

55. Unsurprisingly, Puerto Rico was left in the lurch by those who previously profited from the good times of the 1960s, 1970s, and 1980s. Although neither Puerto Rico nor any of its instrumentalities had ever defaulted on any debt obligations, (123) several of the rating entities, led by Moody's, progressively degraded Puerto Rico bonds for the

first time in their history in anticipation of a default. (124) This had a snowball effect, triggering acceleration clauses, increasing the interest rates at which the government can borrow money, reducing access to capital markets, and further limiting the liquidity and financial flexibility of these entities. The events that have followed are matters of public knowledge and need not be repeated in any detail here.

56. The undeniable underlying fact and cause of the Island's dilemma is that there is an unquestionable democratic deficit in the U.S.-Puerto Rico relationship: This deficit simply cannot be seriously questioned in 2016, particularly since a majority of the Puerto Rican electorate expressly rejected the present status in the 2012 plebiscite. (125)

57. Beyond the patently unconstitutional nature of this colonial regime, numerous international agreements which the United States has entered into require it to take specific actions to end this denigrating colonial relationship and grant political equality to all of its citizens. Leading this body of treaty law (126) is the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), (127) an international agreement which had been ratified by 104 nations by the time the United States Senate followed suit on April 12, 1992. (128) In unambiguous language the

United States agreed that “all peoples have the right to self determination,” and that “[b]y virtue of that right they shall freely determine their political status.” (129) It also pledged that all citizens “shall have” the right to vote (130) and consented to the adoption of whatever laws or measures could be required to guarantee that right, and all others in the ICCPR. (131)

58. The United States has not only not lifted a finger to comply with these clear treaty obligations, but it has actively opposed in the courts any attempt to secure domestic implementation of its provisions. We have the most notorious example of this in *Igartua-de la Rosa v. United States*, (132) in which the First Circuit ruled that the ICCPR’s language does not establish that the treaty is “self-executing” and thus that these rights are not enforceable in the absence of domestic legislation to that effect. This is a totally erroneous conclusion, for many reasons which would require too much time to explain on this occasion. (133) Suffice it to say for present purposes that this is a conclusion that runs in direct contravention to the Senate’s acknowledgment at the time of its ratification of the ICCPR that the federal government was, by virtue of the ratification, bound to enforce the treaty. (134) It is difficult to understand how a court could conclude that the ICCPR, replete with “shall” language, is not binding and self-executing.

Puerto Rico's colonial relationship with the United States violates not only our constitutional law, but also multiple international treaties that are now, by the Senate's own action, U.S. law. (135)

59. I have purposely not discussed the Puerto Rico political establishment's contribution to the fiasco that the Island presently finds itself in, although it undoubtedly bears at least some part of the blame, because, first of all, such an incursion would entail a discussion without any foreseeable end or productive result and second, because in the end, if we ever did reach an end, all we would find is that the principal underlying cause of Puerto Rico's problems is its colonial condition. Although Puerto Rico's political entities have necessarily played a role, theirs has not only been a limited, parochial one, but, most importantly in my opinion, not a decisive one. Any distraction from that ultimate truth, that our colonial condition is the primary cause of the debacle we now face, detracts from efforts to find a solution. There is also little doubt in my mind as to the appropriate path to ending Puerto Rico's perennial colonialism. At the risk of oversimplifying a problem that is hardly simple or easy to solve, I venture to suggest that what we have here is a massive civil rights issue, which can only be ameliorated by adopting a civil rights agenda, and by engaging in the types of actions that have proven effective

in promoting civil rights. We need not reinvent the wheel. There are plenty of successes from which to draw examples and inspiration. It is high time that Puerto Ricans unite their efforts along this front. Such a movement is, if anything, past due.

60. In closing, I will offer an apology, for ending on an even glummer note than any I have yet touched upon. My final observation is this: If history teaches us anything, it is that extreme actions provoke extreme responses. Any creature, backed into a corner, will defend itself. If Congress continues on its present path, if PROMESA is any reflection of its intentions with respect to Puerto Rico, it should beware that its abusive actions do not trigger not simply civil disobedience or resistance but radicalization and outright violence of the type that Puerto Rico saw in the 1930s, 1940s, and 1950s. There are murmurs and stirrings already. And so I leave you with this thought: We must hope that Congress and others in high places take note and consider the potentially explosive consequences of what Congress is PROMESA-ing to Puerto Rico and its U.S. citizen population, which is, even in the context of a relationship as exploitative as that of the United States with regard to Puerto Rico, nothing short of shocking.

61. Thank you for your patience in hearing me out. I wish you the greatest of

successes at this commendable conference
and beyond.

REFERENCIAS / REFERENCES

1 Judge, U.S. Court of Appeals for the First Circuit. The author recognizes the assistance of Rebecca Buckwalter-Poza. Of course, only I am responsible for the content or views expressed herein.

2 No. 15-108 (U.S. filed July 17, 2015).

3 No. 15-233 (U.S. filed Aug. 21, 2015).

4 No. 15-255 (U.S. filed Aug. 26, 2015).

5 See *De Lima v. Bidwell*, 182 U.S. 1 (1901); *Goetz v. United States*, 182 U.S. 221 (1901); *Dooley v. United States*, 182 U.S. 222 (1901); *Armstrong v. United States*, 182 U.S. 243 (1901); *Downes v. Bidwell*, 182 U.S. 244 (1901); *Huus v. N.Y. & P.R. S.S. Co.*, 182 U.S. 392 (1901).

Virgin Islands, for which as recently as January 13th of this year, the United States filed reports as required by Article 73(e) of the United Nations Charter, part of the U.N.

6 “Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end: . . . e. . . . transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible

other than those territories to which Chapters XII and XIII apply.” U.N. Charter art. 73(e). See U.N. Secretary-General, Information from Non-Self-Governing Territories transmitted under Article 73 e of the Charter of the United Nations: Rep. of the Secretary-General, 3, U.N. Doc. A/71/68 (Feb. 1, 2016). http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/68.

7 See JUAN R. TORRUELLA, *THE SUPREME COURT AND PUERTO RICO: THE DOCTRINE OF SEPARATE AND UNEQUAL* 133-67 (1988); JOSE TRIAS MONGE, *PUERTO RICO: THE TRIALS OF THE OLDEST COLONY IN THE WORLD* (1997); see also Juan R. Torruella, *Hacia donde vas Puerto Rico?*, 172 *YALE L.J.* 1503, 1514-18 (1998).

8 No. 15-108 (U.S. filed July 17, 2015).

9 Brief of U.S. Solicitor General at 16-19, *Puerto Rico v. Sanchez Valle*, No. 15-108 (U.S. filed July 17, 2015) (citing *Grafton v. United States*, 206 U.S. 333, 354 (1907)).

10 H.R. 4900, 114th Cong. (2d Sess. 2016) § 101(e)(3) (draft introduced April 12, 2016).

11 *Id.* § 201.

12 *Id.* § 101(e)(2).

13 *Id.* § 101(e)(3).

14 *Id.* § 104(c)(2)

15 *Id.* § 204(a)(1)-(2).

16 *Id.* § 204(a)(5).

17 *Id.* § 204(b)(2).

18 *Id.* § 207.

19 Id. § 405.

20 Danica Coto, US official warns Puerto Rico resources targeted amid crisis, YAHOO, Apr. 1, 2016, [https://www.yahoo.com/news/us-interior-secretary-visits-puerto-rico-unveil-project-](https://www.yahoo.com/news/us-interior-secretary-visits-puerto-rico-unveil-project-151937605.html)

151937605.html.

21 Treaty of Peace between the United States of America and the Kingdom of Spain, U.S. Spain, art. IV, Dec. IO, 1898, 30 Stat. 1754, T.S. 343 [hereinafter Treaty of Paris].

22 For example, after the Mexican-American War, just fifty years before, residents of the newly acquired territory were given the choice between declaring a preference to retain Mexican citizenship and automatically becoming U.S. citizens by staying in the territory for one year. See Treaty of Guadalupe Hidalgo, U.S.-Mex., art. VIII, Feb. 2, 1848, 9 Stat. 922, T.S. 207; Mae M. Ngai, Birthright Citizenship and the Alien Citizen, 75 *FORD-HAM L. REV.* 2521, 2527 (2007).

23 FERNANDO BAYRON TORO, *ELECCIONES Y PARTIDOS POLITICOS DE PUERTO RICO* 3 (1977); see 330 *GACETA DE MADRID* Torno IV 625, 625 (Nov. 26, 1897) (Sp.) (publication of decree providing for Spanish residents of the Antilles the same rights as the inhabitants of the Spanish peninsula), <http://www.boe.es/datos/pdf/sI BO EII 1897113301A00625-00625.pdf>; Real Decreto, 298 *GACETA DE PUERTO RICO* 2, 2-3 (Dec. 16, 1897) (Sp.) (Title I through IV of decree). <http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/201320107411897-12-16led-1lseq-1l>; Real Decreto (Continuacion), 299 *GACETA DE PUERTO RICO* 1, 1-2 (Dec. 17, 1897) (Sp.) (Title V through title VIII), <http://chroniclingamerica.loc.gov/leen/2013201074/1897-12-17l ed-1seq-1l>; Real Decreto (Conclusion), 300 *GACETA DE PUERTO RICO* 1, 1 (Dec. 18, 1897) (Sp.) (Title IX through end), <http://>

chroniclingamerica.loc.gov /leen201320107 4/ 1897-12-18/ed-1seq- 1/; see also REPORT OF THE ... ANNUAL MEETING OF THE LAKE MOHONK CONFERENCE OF FRIENDS OF THE INDIAN AND OTHER DEPENDENT PEOPLES, Vol. 25, Parts 1907-09, at 176.

24 Annual Report of the Maj. General Commanding the Army, Nelson A. Miles, Nov. 5, 1898, MESSAGES, 1898-1899, at 31-32.

25 553 U.S. 723, 727 (2008).

26 HUGH THOMAS, CUBA, THE PURSUIT OF FREEDOM 211 (1971).

27 60 U.S. 393, 446 (1856) (emphasis added).

28 “The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to prejudice any claims of the United States, or of any particular state.” U.S. CONST. art IV, § 3.

29 See Definitive Treaty of Peace Between the United States of America and His Britanic Majesty, U.S.- Gr. Brit., Sept. 3, 1783, 8 Stat. 80.

30 60 U.S. at 446-47. See Northwest Ordinance of 1787, 1 Stat. 50, 51 (1789).

31 118 U.S. 356, 369-70 (1886) (emphasis added).

32 RUBIN FRANCIS WESTON, RACISM IN U.S. IMPERIALISM: THE INFLUENCE OF RACIAL ASSUMPTIONS ON AMERICAN FOREIGN POLICY, 1893-1946, at 15 (1972).

33 HENRY K. CARROLL, REPORT ON THE ISLAND OF PORTO RICO, SPECIAL COMMISSION FOR THE UNITED STATES ON PORTO RICO, U.S. GOVERN-

MENT PRINTING OFFICE 59-61, 63 (1899).

34 GEORGE W. DAVIS, REPORT OF THE MILITARY GOVERNOR OF PORTO RICO ON CIVIL AFFAIRS," VOL. 1, PT. 13, ANNUAL REPORTS OF THE WAR DEPARTMENT, 1900, U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 19-20 (1900).

35 33 Cong. Rec. 3616 (daily ed. Apr. 2, 1900)(statement of Sen. Bates). See also id. at 3613.

36 31 Stat. 77 (1900) (described as "An Act Temporarily to provide revenues and a civil government for Porto Rico, and for other purposes").

37 31 Stat. 77, 81-82, 84.

38 Id. at 78.

39 That clause concludes, "all Duties. Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States." U.S. CONST. art. I, § 8, cl. I.

40 See supra, note 5.

41 163 U.S. 537 (1896).

42 18 U.S. 317 (1820).

43 Jones Act (Puerto Rico), ch. 145, § 2, 39 Stat. 951, 951-52 (1917) (codified as amended at

44 258 U.S. 298 (1922).

45 A DICTIONARY OF THE SOCIAL SCIENCES, JULIUS GOULD & WILLIAM KOLB EDS. 102 (1964).

46 See MONGE, PUERTO RICO, supra note 7.

47 ANNUAL BOOK ON STATISTIC OF PUERTO RICO,

FISCAL YEAR 1947-48, DEPT. OF AGRICULTURE AND COMMERCE, SAN JUAN, at Table 139 (1948); see also ARTURO MORALES CARRION, PUERTO RICO: A POLITICAL AND CULTURAL HISTORY 137 (1983).

48 See MORALES CARRION, PUERTO RICO, at 174. The Central Aguirre Sugar Company, a Massachusetts trust, was at times the largest sugar company in the world. That connection to Massachusetts is most likely the reason why Puerto Rico was placed in the First Circuit.

49 Id. at 217.

50 Id. at 216-17; see also BAILEY W. DIFFIE, PORTO RICO: A BROKEN PLEDGE 46-50 (1931); Judd Polk, The Plight of Puerto Rico, 57 POL. SCI. Q. 481,482-503 (Dec. 1942).

51 Pursuant to the various Sugar Acts, which among other things assigned production quotas to various sugar-producing areas, Puerto Rico was unable to compete economically.

52 MORALES CARRION, PUERTO RICO, at 217.

53 JAMES L. DIETZ, ECONOMIC HISTORY OF PUERTO RICO: INSTITUTIONAL CHANGE AND CAPITALIST DEVELOPMENT 139 (1986).

54 Id.

55 MORALES CARRION, PUERTO RICO at 243. The rural population constituted seventy percent of Puerto Rico's population of almost 1,900,000 at the time. Id.

56 SAKARI SARIOLA, THE PUERTO RICAN DILEMMA 92 (1979).

57 MORALES CARRION, PUERTO RICO at 243.

58 *Id.*

59 The field workers, who constituted the great majority of those employed in the sugar industry, could only find work during the four or five months of the year that the harvesting of sugar cane took place.

60 Marjorie Ruth Clark, *Our Own Puerto Rico*, 4 AN-TIOCH R. 383, 389 (Summer 1944).

61 *Id.*

62 *Id.* at 484

63 Clark, *Our Own Puerto Rico*, at 388.

64 MORALES CARRION, *PUERTO RICO*, *supra* note 47, at 173.

65 *Puerto Rico Trade, Exports and Imports, Economy Watch* (March 30, 2010), http://www.economywatch.com/world_economy/puerto-rico/export-import.html.

66 Polk, *The Plight of Puerto Rico*, *supra* note 50, at 485.

67 *Id.* at 490.

68 Merchant Marine Act of 1920, Pub. L. No. 66-261, 41 Stat. 988, 999 (1920) (codified as amended at 46 U.S.C. §§ 55101, *et seq.*).

69 See U.S. DEPARTMENT OF MARITIME TRANSPORTATION, *COMPARISON OF U.S. AND FOREIGN-FLAG OPERATING COSTS* (2011) (examining reasons for significantly higher operating costs of U.S.-flag vessels and comparing costs with those of foreign-flag vessels); cf GENERAL ACCOUNTABILITY OFFICE, *CHARACTERISTICS OF THE ISLAND'S MARITIME TRADE AND POTENTIAL EFFECTS OF MODIFYING*

THE JONES ACT 28-29 (2013), <http://www.gao.gov/assets/660/653046.pdf> (acknowledging the Jones Act “may result in higher freight rates” but claiming “it is not possible to measure the extent to which rates in this trade are higher than they otherwise would be” and concluding “the law has helped to ensure reliable, regular service . . . important to the Puerto Rico economy”).

70 Rory Carroll, *The US Shipping Industry Is Putting a Multimillion Dollar Squeeze on Puerto Rico*, REUTERS (Jul. 9, 2015).

71 FED. RESERVE BANK OF NEW YORK, REPORT ON THE COMPETITIVENESS OF PUERTO RICO’S ECONOMY 13 (June 29, 2012).

72 See REXFORD GUY TUGWELL, *THE STRICKEN LAND: THE STORY OF PUERTO RICO* (1968).

73 TORRUELLA, *THE SUPREME COURT AND PUERTO RICO*, supra note 7, at 237 (Table 23)

74 Id. at 244 (Table 27).

75 Act of June 16, 1933, c. 90, 48 State. 195, 15 U.S.C. 701-712.

76 JUAN GONZALEZ, *HARVEST OF EMPIRE: A HISTORY OF LATINOS IN AMERICA* 252 (2000).

77 *Puerto Rico Braces for Base Closing*, WASH. TIMES (Apr. 1, 2004).

78 COUNCIL ON HEMISPHERIC AFFAIRS, *Clearing Out without Cleaning Up: The US. and Vieques island* (May 19, 2011).

79 See *Abreu v. United States*, 468 F. 3d 20 (1st Cir. 2006).

80 See U.N. Charter art. 73.

81 Act of July 3, 1950, Pub. L. No. 600, 64 Stat. 319, (codified at 48 U.S.C. § 731 (b) (1994)).

82 Public Law 47, 66 Stat. 327 (1952).

83 See TORRUELLA, THE SUPREME COURT AND PUERTO RICO, *supra* note 7, at 160-67.

84 El Gobernador pide a Rice que enmiende el informe sobre el estatus político de P. Rico, YAHOO NEWS, (Nov. 19, 2007 12:01 pm) (“Acevedo Vila aseguro que si Rice no enmienda esas conclusiones ‘debe notificar a las Naciones Unidas que Estados Unidos le mintió o ignora la relación de Estado Libre Asociado que fue instituida en el 1953’, lo que ‘ha perpetuado un engaño monumental’ en los boricuas, los estadounidenses y la comunidad internacional.”).

85 DIETZ, *supra* note 53; see also MORALES CARRION, PUERTO RICO, *supra* note 47, at 243-44.

86 *Id.* at 269-70, 286; see also TORRUELLA, THE SUPREME COURT AND PUERTO RICO, *supra* note 7, at 240-41.

87 EMILIO PANTOJAS-GARCIA, DEVELOPMENT STRATEGIES AS IDEOLOGY: PUERTO RICO'S EXPORT-LED INDUSTRIALIZATION EXPERIENCE 17-18 (1990).

88 U.S. GEN. ACCOUNTING OFFICE, GAO/GGD-93-109, TAX POLICY: PUERTO RICO AND SECTION 936 TAX CREDIT 2-3 (1993).

89 I.R. C. § 936(a)(l) (1996) (repealed 1996).

90 GAO, PUERTO RICO AND SECTION 936 TAX CREDIT, at 2-3.

91 PANTOJAS-GARCIA, at 153.

92 See Kelly Richmond, Drug Companies Fear Loss of Tax Exemption, N.J. RECORD, Nov. 8, 1993.

93 See GAO, PUERTO RICO AND SECTION 936 TAX CREDIT, at 3.

94 See U.S. GEN. ACCOUNTING OFFICE, GAO/GGD-92- 72 BR , PHARMACEUTICAL INDUSTRY TAX BENEFITS OF OPERATING IN PUERTO RICO 14 (1992).

95 See Milo Peck & Helen W. Johns, The Death of Section 936: Closing a Loophole or Poor Policy?, 22 INT'L TAXJ. 1 (1996); Angel L. Ruiz Mercado & Edwin Melendez, The Potential Impact of the Repeal of Section 936 on Puerto Rico's Economy: Summary, BOLETIN DE ECONOMIA 4-10 (Depto. de Economia, U.P.R., Rio Piedras) (July-Sept. 1997).

96 COMMONWEALTH OF PUERTO RICO, FINANCIAL INFORMATION AND OPERATING DATA REPORT 18 (2013).

97 See Robert Z. Lawrence & Juan Lara, Trade Performance and Industrial Policy, in THE ECONOMY OF PUERTO RICO: RESTORING GROWTH 507, 528-31 (Susan M. Collins et al. eds., 2006); GONZALEZ, HARVEST OF EMPIRE, supra note 76, at 85.

98 Aid to Families with Dependent Children, 42 U.S.C. §§ 1308(a)(I), 1396 (b) (1976 ed. and Supp. II), and benefits programs for the aged, 42 U.S.C. §301 et seq., the blind, 42 U.S.C. §1201 et seq, the disabled, 42 U.S.C. §1351 et seq., as well as the Supplemental Social Security program for those same populations. 42 U.S.C. §1381 et seq.

99 446 U.S. 651 (1980) (per curiam).

100 435 U.S. 1 (1978).

101 446 U.S. at 652.

102 Id. at 655-56 (Marshall, J., dissenting).

103 Lizette Alvarez & Abby Goodnough, Puerto Ricans Brace for Crisis in Health Care, N.Y. TIMES (Aug. 2, 2015).

104 Id.

105 Id.

106 Maria Levis, The Price of Inequality for Puerto Rico , HEALTH AFFAIRS , Dec. 29, 2015.

107 11 Puerto Ricans per day lose their homes for defaulting on their mortgages, FOX NEWS,

(Feb. 17, 2016).

108 Percent of People Below Poverty Level in the Past 12 Months, U.S. CENSUS BUREAU (2014), <http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk>.

109 CONSOLIDATED FEDERAL FUNDS REPORT FOR FISCAL YEAR 2010, U.S. CENSUS BUREAU 1, at Tbl. 1 (2010), <https://www.census.gov/prod/2011pubs/cffr-10.pdf>.

110 Median Household Income (in 2014 inflation-adjusted dollars), U.S. CENSUS BUREAU, <http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk>.

111 See FED. RESERVE BANK OF N.Y., REPORT ON THE COMPETITIVENESS OF PUERTO RICO'S ECONOMY, note 71, at 4 ("In analyzing the Puerto Rican

economy, we keep in mind one of its unique features: a substantial share of production is carried out by U.S. multinational corporations that took advantage of the sizable federal income tax benefits available to firms located on the Island. The repatriation of the profits of these corporations to their parent firms on the U.S. mainland, in addition to a shifting of income by these U.S. corporations, leads to an overstatement of the amount of income accruing to residents of Puerto Rico.”).

112 CARIBBEAN Bus., THE PUERTO RICO INVESTOR'S GUIDE To GOVERNMENT RESOURCES 5, 20-21 (2007).

113 See *id.*; FED. RESERVE BANK OF N.Y., REPORT ON THE COMPETITIVENESS OF PUERTO RICO'S ECONOMY, *supra* note 71, at 4.

114 See GOBIERNO DE PUERTO RICO OFICINA DEL GOBERNADOR JUNTA DE PLANIFICACION, IMPACTO DE SECTOR EXTERNO EN LA ECONOMIA DE PUERTO RICO, IN INFORME ECONOMICO GOBERNADOR 1995, at 12 (1996).

115 Economy at a Glance: Puerto Rico, BUREAU LAB. STAT., <http://www.bls.gov/eag/eag.pr.htm> (showing unemployment rate for Feb. 2016 is 11.7%).

116 Local Area Unemployment Statistics: Puerto Rico, BUREAU LAB. STAT., http://data.bls.gov/timeseries/LASST720000000000003?data_tool=XGtable (data extracted on April 4, 2016).

117 Unemployment Rates for States, BUREAU LAB. STAT., Mar. 25, 2016, <http://www.bls.gov/web/laus/laumstrk.htm>.

118 See Economy at a Glance: Detroit-Livonia-Dearborn, MI, BUREAU LAB. STAT., Apr. 1, 2016, http://www.bls.gov/eag/eag.mi_detroit_md.htm.

119 See U.S. CENSUS BUREAU, Poverty Level, *supra* note 108.

120 See THE PUERTO RICAN DIASPORA: HISTORICAL PERSPECTIVE, CARMEN TERESA WHALEN & VICTOR VAZQUEZ HERNANDEZ, EDS. (2005). The first wave left shortly after the change in sovereignty; the second departed after the Second World War and the demise of the sugar industry. We are seeing the third wave today.

121 Estimates of the Components of Resident Population Change: April 1, 2010 to July 1, 2014, U.S. CENSUS BUREAU, [http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsp/pages/productview .xhtml?src=bkmk](http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsp/pages/productview.xhtml?src=bkmk).

122 Jens Manuel Krogstad, Puerto Ricans Leave in Record Numbers for Mainland US., PEW RESEARCH CENTER, Oct. 14, 2015, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/10/14/puerto-ricans-leave-in-record-numbers-for-mainland-u-s/>.

123 Patrick Gillespie, Puerto Rico just defaulted for the first time, CNN, Aug. 3, 2015. The undeniable underlying fact and cause of the Island's dilemma is that there is an unquestionable democratic deficit in the U.S.-Puerto Rico relationship: This deficit simply cannot be seriously questioned in 2016, particularly since a majority of the Puerto Rican electorate expressly rejected the present status in the 2012 plebiscite. 125

124 S&P Downgrades Puerto Rico Debt to 'CCC+' from 'B,' REUTERS, Apr. 24, 2015.

125 CEE Event – Condición Política Territorial Actual-Resumen, COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO, Nov. 8, 2012, http://div2.ceepur.org/REYDI_NocheDelEvento/index.html#es/default/CONDICION_POLITICA_TERRITORIAL_ACTUAL_ISLA.xml; CEE Event – Opciones No Territoriales –

Resumen, COMISION ESTATAL DE ELECCIONES DE PUERTO RICO, Nov . 8 , 2012, [http://div2.ceepur.org/REYDI_NocheDelEvento/index.html#es/default/OPCIONES_NO_TERRITORIALES ISLA.xml](http://div2.ceepur.org/REYDI_NocheDelEvento/index.html#es/default/OPCIONES_NO_TERRITORIALES_ISLA.xml).

126 Others include the Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217 A, U.N., GAOR, 3d Sess., 1st plen. mtg., U.N. Doc. AI 810 (Dec. 12, 1948), Organization of American States [OAS], American Declaration of Human Rights and Duties of Man, OAS Res. XXX (I 948); OAS, Inter-American Democratic Charter, OAS Doc. OOEA/ser.P/AG/RES.1 (XXVIII-E/01 (2001)).

127 See International Covenant on Civil and Political Rights [hereinafter ICCPR], opened for signature Dec 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171.

128 See 138 Cong. Rec. S4781, S4783.

129 ICCPR, art. 1, cl. 1.

130 *Id.* .. at art. 25.

131 *Id.* .. at art. 2, cl. 2.

132 417 F.3d 145 (1st Cir. 2005).

133 But see *id.* at 173-75 (Torruella, J., dissenting).

134 “[T]he United States understands that the Covenant shall be implemented by the Federal Government.” 138 Cong. Rec. S4781, S4784 (emphasis added).

135 “[A]ll Treaties made or which shall be made, under the Authority of the United states, shall be the Supreme Law of the Land, and the Judges in every State shall be bound thereby, any thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.” U.S. Const., Art. VI, Sec. 1, Cl.. 2.

Form 108

Castro-3434

EASTERN SUGAR CORPORATION

CENTRAL

COLONO O COLONIA

APR 10 1938

TICKET No.

4321

TRUCK O VAGON No.

LBS. DE CASA

RENDIMIENTO AL 65% PARA EL CAMPO

Crusher Juice

BRIX	SUCROSA	PUREZA
19.90	17.57	88.8

Nota: Esta tarjeta no es oficial y no afecta la liquidación final de ardoar. Es solamente una guía para el campo.

